

39ª REUNION — 30ª SESION ORDINARIA — 14 DE SEPTIEMBRE DE 1949

Presidencia del doctor Héctor J. Cámpora y del señor Roberto Dri

Secretarios: doctores Leonidas Zavalla Carbó y Rafael V. González

DIPUTADOS PRESENTES:

ALBRIEU, Oscar E.
ALVAREZ PEREYRA, Manuel
ALLUB, Rosendo
ARÁOZ, Ricardo E.
ARGAÑA, José M.
ASTORGANO, José
ATALA, Luis
AYALA LÓPEZ TORRES, Francisco
BAGNASCO, Vicente
BALBIN, Ricardo
BENÍTEZ, Antonio J.
BERETTA, Eduardo
BERNARDEZ, Manuel
BIDEGAIN, Oscar R.
BONAZZOLA, Romeo E.
BONINO, Alberto C.
BRUGNEROTTO, Juan N. D.
BRUNO, Domingo
BUSTOS FIERRO, Raúl
BUTTERFIELD, Humberto
CÁMPORA, Héctor J.
CÁMUS, E. P.
CANDIOTTI, Alberto M.
CANÉ, José
CARRERAS, Ernesto A.
CASAS NOBLEGA, Armando
CATTÁNEO, Atilio E.
COLOM, Eduardo
CONTE GRAND, José Amadeo
COOKE, John William
CÓRDOVA, J. Salvador
CUFFÉ, Orlando H.
CURSACK, Roberto Enrique
DÁVILA, J. Aníbal
DECKER, Rodolfo A.
DEGREEF, Juan Ramón
DE LA TORRE, Juan
DEL CARRIL, Emilio Donato
DEL MAZO, Gabriel
DELLEPIANE, Luis
DE PRISCO, Guillermo
DÍAZ, Carlos A.
DÍAZ, Manuel M.
DÍAZ DE VIVAR, Joaquín
DRI, Roberto
ERRO, Saturnino S.
ESTRADA, Angel C.
FERNÁNDEZ, Hernán S.
FERRANDO, Manuel P.
FERRE, Modesto
FILIPPO, Virgilio M.
FORTEZA, Eduardo Julio

FREGOSSI, Luis J.
FRONDIZI, Arturo
GARAGUSO, Bernardino Hipólito
GARAY, Marcelino S.
GARCIA, Manuel
GONZÁLEZ FUNES, Tomás
GUARDO, Ricardo C.
HARAMBOURE, Horacio
IBARGUEN, Prudencio M.
ILLIA, Arturo U.
LAGRAÑA, Héctor D.
LAREO, Ricardo
LASCAR, Guillermo F.
LAVIA, Ludovico
LELOIR, Alejandro H.
LEMA, Manuel E.
LETAMENDI, Balbino (h.)
LICEAGA, Félix J.
LÓPEZ SERROT, Oscar
LUCINI, Raúl Felipe
MAC KAY, Luis E.
MACHARGO, Alfredo F.
MAINERI, D. Jacinto
MALDONADO LARA, José María
MANTARAS, Manuel J.
MARIATEGUI, Angel S.
MARINI, Angel C.
MAROTTA, José
MARTÍNEZ GUERRERO, Guillermo
MARTÍNEZ LUQUE, Enrique
MERCADER, Emir E.
MESSINA, Humberto
MIEL ASQUÍA, Angel J.
MONJARDÍN, Federico F.
MONTES, Abel
MONTES, Juan Manuel
MONTIEL, Alcides E.
MORENO, José Luis
NORIEGA, Juan J.
NOVELLINO, Francisco
OSINALDE, Rafael
PALACIO, Ernesto
PASQUALI, Juan Domingo
PASQUINI, José P. D.
PASTOR, Reynaldo A.
PEREA, Pedro J.
PEREYRA, Luis Alberto
PÉREZ MARTÍN, José
PIEROTTI, Mario
PIRANI, Antonio S.
PONCE, Angel L.
PONTIERI, Silverio
RABANAL, Francisco
REPETTO, Agustín

REYNÉS, Leandro R.
RICAGNO, Roberto
ROCHE, Luis Armando
RODRÍGUEZ, Manuel
RODRÍGUEZ, Nerio M.
RODRÍGUEZ DE LA TORRE, Raúl
ROJAS, Absalón
ROJAS, Nerio
ROSSI, José
ROUGGIER, Valerio S.
RUDI, Ricardo
RUMBO, Eduardo I.
SÁNCHEZ, Pedro
SAN MILLÁN, Ricardo Antonio
SANTANDEK, Silvano
SAFORITI, Luis
SARAVIA, Teodoro S.
SARMIENTO, Manuel
SEEBER, Carlos Manuel
SILVESTRE, Adolfo J. B.
SOBRAL, Antonio
SOLÁ, Fernando
TEJADA, Ramón Washington
TILLI, Pedro
TOMMASI, Victorio M.
TORO, Ricardo
TREBINO, Natalio
URANGA, Raúl L.
URTIAGA BILBAO, Mateo de
VALDEZ, Celestino
VANASCO, Julio A.
VAREA, Isidoro
VELLOSO COLOMBRES, Manuel F.
VERGARA, Amado
VILLACORTA, Luis René
VILLAFÁNE, José María
VISCA, José Emilio
VISCHI, Albino
VÍTOLO, Alfredo E.
YADAROLA, Mauricio L.
ZAMUDIO, Juan Carlos
ZANONI, Pedro P.
ZAVALA ORTIZ, Miguel Angel

AUSENTES, CON AVISO:

GIL FLOOD, Mario
STINCO, Luis A.

AUSENTES, CON LICENCIA:

CLEVE, Ernesto
FAJEE, José Benito
MONTES DE OCA, Carlos
OTTONELLO, Benito J.

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría.
- 2.—Izamiento de la bandera nacional.
- 3.—Versiones taquigráficas.
- 4.—Asuntos entrados:
 - I.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: modificación de las disposiciones en vigor sobre liquidación de sueldos del personal diplomático, consular, administrativo, militar, naval y de aeronáutica que preste servicios en el exterior.
 - II.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: régimen jurídico relativo a los sepulcros.
 - III.—Comunicaciones del Honorable Senado.
 - IV.—Comunicaciones oficiales.
 - V.—Despachos de comisión.
 - VI.—Peticiónes particulares.
 - VII.—Proyecto de ley del señor diputado Velloso Colombres: pensión a las señoritas María Esther y María Cristina Barralía.
 - VIII.—Proyecto de ley del señor diputado Carreras: subsidio al Instituto de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de Rosario.
 - IX.—Proyecto de ley del señor diputado Álvarez Pereyra: pensión a la señorita Dominga Ema Riccheri.
 - X.—Proyecto de ley del señor diputado Trebino y otros: subsidio al Club Hípico General José María Paz, de la ciudad de Córdoba.
 - XI.—Proyecto de ley reproducido por el señor diputado Bonazzola: erección de un monumento a don Miguel de Cervantes Saavedra.
 - XII.—Proyecto de ley del señor diputado Camus: construcción de una planta frigorífica en Puerto Madryn, territorio de Chubut.
 - XIII.—Proyecto de ley del señor diputado Rabanal y otros: pensión al señor Teótimo González Videla.
 - XIV.—Proyecto de ley del señor diputado Carreras: subsidio para obras al Instituto de la Tradición Martín Fierro, de Rosario, Santa Fe.
 - XV.—Proyecto de ley del señor diputado Albrieu: creación de una Escuela Profesional de Mujeres con anexo comercial, en Chilecito, provincia de La Rioja.
 - XVI.—Proyecto de ley del señor diputado Visca: aumento de sueldos a los periodistas y empleados administrativos de empresas periodísticas comprendidos en las leyes 13.502 y 13.503.
 - XVII.—Proyectos de resolución y de declaración en la mesa de la Honorable Cámara:

1.—Del señor diputado **Bustos Fierro**: expresión del deseo de que se cambie el nombre a la estación Longchamps, del Ferrocarril Nacional General Roca, por el de Escritor Raúl Scalabrini Ortiz.

2.—De los señores diputados **Vitolo y González Funes**: pedido de informes verbales al Poder Ejecutivo sobre acción del gobierno en la producción vitivinícola y en el comercio de vinos.

- 5.—Concédese licencia para faltar a sesiones a los señores diputados **Ottonello y Montes de Oca**.
- 6.—Homenaje a la memoria de don Enrique Botta.
- 7.—Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado **González Funes** con motivo de publicaciones periodísticas.
- 8.—Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado **Pastor** con motivo de actuaciones de la comisión especial parlamentaria investigadora de cuestiones relacionadas con denuncias de torturas.
- 9.—Proyecto de resolución por el que se dispone la designación de una comisión especial encargada de redactar un proyecto de Código del Niño.
- 10.—Moción del señor diputado **Miel Asquia** de preferencia para el proyecto de ley sobre coeficiente de remuneraciones del personal del servicio exterior de la Nación.
- 11.—La Honorable Cámara estudia, en comisión, el proyecto de ley a que se refiere el número 10 de este sumario.
- 12.—Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara, constituida en comisión, en el proyecto de ley a que se refieren los números 10 y 11 de este sumario. Se sanciona.
- 13.—Moción del señor diputado **Bagnasco** de preferencia para el proyecto de ley sobre subsidio a la Unión Americana de Medicina del Trabajo.
- 14.—La Honorable Cámara estudia, en comisión, el proyecto de ley a que se refiere el número 13 de este sumario.
- 15.—Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara, constituida en comisión, en el proyecto de ley a que se refieren los números 13 y 14 de este sumario. Se sanciona.
- 16.—Moción del señor diputado **Haramboure** de preferencia para el proyecto de ley orgánica para la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación.
- 17.—La Honorable Cámara estudia, en comisión, el proyecto de ley a que se refiere el número 16 de este sumario.
- 18.—Apéndice:

Sanciones de la Honorable Cámara.

—En Buenos Aires, a los catorce días del mes de septiembre de 1949, a la hora 16:

Sr. Presidente (Dri). — Queda levantada la conferencia.

15

SUBSIDIO

Sr. Presidente (Dri). — Se va a votar en general el despacho producido por la Honorable Cámara en comisión, en el proyecto de ley sobre subsidio a la Unión Americana de Medicina del Trabajo.

— Resulta afirmativa de 71 votos; votan 86 señores diputados.

Sr. Presidente (Dri). — En consideración en particular el artículo 1º.
Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 70 votos; votan 85 señores diputados.

Sr. Presidente (Dri). — En consideración el artículo 2º.

Se va a votar:

— Resulta afirmativa de 68 votos; votan 85 señores diputados.

— El artículo 3º es de forma.

Sr. Presidente (Dri). — Queda sancionado el proyecto de ley (1).

16

MOCION

Sr. Presidente (Dri). — No encontrándose en el recinto el señor diputado Candiotti, a quien la Presidencia había prometido conceder la palabra, tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Haramboure. — Hago moción de que la Cámara estudie en comisión el proyecto publicado en la orden del día 170, que se refiere a la ley orgánica para la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación. Se trata, señores diputados, de un despacho del período anterior.

Sr. Presidente (Dri). — En consideración la moción formulada por el señor diputado por Buenos Aires.

Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. Zanoni. — Las condiciones en que se encuentra este despacho va a ocasionar al cuerpo dificultades de las que difícilmente podrá salir.

Se trata de un despacho que formulado hace un año, conjuntamente por las comisiones de Obras Públicas y de Presupuesto y Hacienda, ha sufrido un cambio sensible. Aquel despacho ya había sido formulado con retardo frente al deseo del Poder Ejecutivo de su consideración a la mayor brevedad, y no contempló las reformas que posteriormente sufrió la Constitución Nacional. Tampoco se tuvo en cuenta, porque no se había puesto en movimiento, el mecanismo de la Dirección Nacional Inmobiliaria, las disposiciones que pudieran resultar encontradas y excluyentes en las funciones de ambos organismos. Todo esto fué considerado posteriormente por la Comisión, en cuyo despacho se deja traslucir esa especie de desconfianza por el articulado, que en cierto modo estaba condicionado a las posibles novedades que aportaran esos dos factores, con respecto al organismo Obras Sanitarias de la Nación.

Désde la fecha de aquel despacho hasta ahora, ha transcurrido, como dije, un año y durante ese lapso se han producido los hechos que se prevenían: reforma de la Constitución Nacional y funcionamiento de la Dirección Nacional Inmobiliaria. Ello ha determinado la modificación de unos artículos, y la supresión de otros que totalizan más o menos 30. El despacho consta de 71 artículos. Quiere decir que el cuerpo entraría a tratarlo con un desconocimiento de casi la mitad de los artículos por parte de gran número de señores diputados.

Señalo estos inconvenientes, para dejar constancia de lo inadecuado que resulta esta forma de tratar cuestiones de tanta trascendencia sin que los señores diputados, con el conocimiento que debieran tener de los asuntos sometidos a su consideración, aporten todo lo que serían capaces de aportar en otras circunstancias. Es decir, que el improvisamiento con que entrarán a actuar la casi totalidad de los señores diputados, va a ser un grave obstáculo para el acierto en la redacción de la ley.

Considero que ni los miembros de la Comisión de Obras Públicas, y mucho menos los de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, han podido participar formalmente en su estudio, luego del despacho formulado hace un año, porque las reformas que contiene el que obra en las bancas de los señores diputados son resultado de conversaciones pasajeras mantenidas en los pasillos de la Cámara y en otras ocasiones de pie, en torno a la mesa de la Comisión de Obras Públicas, entre los diputados que conseguimos encontrarnos en los días fijados para las reuniones.

Por estas razones, señor presidente, nos oponemos a que este asunto sea tratado de inmediato.

Sr. Presidente (Dri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

(1) Véase el texto de la sanción en la página 3378.

Sr. Marotta. — Señor presidente: me llaman la atención las manifestaciones del señor diputado por Santiago del Estero, miembro de la Comisión de Obras Públicas, porque las modificaciones que se van a introducir a este despacho están basadas en las razones que podrán apreciar los señores diputados al considerarse en particular.

En primer término, se trata de ajustar algunos artículos de este despacho, a la nueva Constitución Nacional, y al funcionamiento de la Dirección Nacional Inmobiliaria, creada por la ley 12.922.

Alrededor de estos dos aspectos giran las modificaciones que se propicia introducir en el despacho. Es evidente que los señores diputados del sector de la minoría que pertenecen a la Comisión de Obras Públicas, conocen perfectamente las mismas. Hemos conversado sobre ello y tienen en su poder un informe posterior a la modificación, con sus fundamentos, que a mi juicio son suficientemente ilustrativos.

Por otra parte, las modificaciones son de forma y no de fondo. Hemos tenido oportunidad de analizar este despacho minuciosamente, como bien lo saben los señores diputados del sector radical que pertenecen a la comisión.

Además, urge que sancionemos una ley orgánica para la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, porque está desarrollando sus actividades con aproximadamente veinte leyes complementarias, situación que no puede prolongarse.

Por las razones expuestas, solicito que se declare la Cámara en comisión para tratar esta orden del día. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Zanoni. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Dri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. Zanoni. — Deseo dejar aclarado, señor presidente, que no he afirmado en mi exposición que los diputados de la oposición no conocamos las reformas introducidas al despacho. Quizá seamos los únicos que hemos asistido con puntualidad a la comisión cuando se anunciaba que se tratarían las reformas.

Me refería al resto de los integrantes de la Cámara, que se van a encontrar ahora con un despacho totalmente distinto al que tienen en sus bancas. También hice referencia a la exigencia del Poder Ejecutivo que al mandar el mensaje pedía que fuese despachado de inmediato, no obstante lo cual ha permanecido un año sin despacharse y otro año más en espera de su tratamiento.

Sr. Presidente (Dri). — Se va a votar la moción de constituir la Cámara en comisión para considerar el proyecto contenido en la orden del día 170, sobre ley orgánica para la Admi-

nistración General de Obras Sanitarias de la Nación.

— Resulta afirmativa de 63 votos; votan 86 señores diputados.

17

CONFERENCIA. — OBRAS SANITARIAS DE LA NACION

Sr. Presidente (Dri). — Queda abierta la conferencia.

Se va a votar si se mantiene la unidad del debate.

— Resulta afirmativa de 64 votos; votan 86 señores diputados.

Sr. Presidente (Dri). — Por Secretaría se va a dar cuenta del texto del proyecto de ley contenido en la orden del día 170, con las modificaciones indicadas por el señor diputado por la Capital.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Institución

Artículo 1º — La actual Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, constituirá una institución dependiente del Ministerio de Obras Públicas, que se regirá por las disposiciones de la presente ley, conservando su actual denominación.

Objeto de la institución

Art. 2º — Corresponde a la misma el estudio, proyecto, construcción, renovación, ampliación y explotación de las obras de provisión de agua y saneamiento urbano en la Capital Federal y ciudades y pueblos de la República, y la explotación, alumbramiento y utilización de las aguas subterráneas.

El Poder Ejecutivo podrá autorizar a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, a establecer industrias para extraer o producir la materia prima o los materiales elaborados necesarios para sus servicios, o bien a participar en empresas de capital mixto, que persigan el mismo objeto.

Organización, atribuciones, deberes y autoridades

Art. 3º — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación funcionará con la autarquía que le atribuye la presente ley, pero el Poder Ejecutivo ejercerá sobre ella la superintendencia necesaria para el debido control de su funcionamiento y podrá intervenir-

la cuando las exigencias del buen servicio lo hicieran indispensable.

La superintendencia prevista en el párrafo precedente se ejercerá sin perjuicio de las facultades que correspondan a la Contaduría General de la Nación por la ley de contabilidad y demás vigentes, salvo en cuanto hayan quedado modificadas por la presente.

Art. 4º — Para el cumplimiento de los fines consignados en el artículo 2º, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, tendrá las siguientes facultades:

- a) Administrar los bienes e instalaciones pertenecientes a la institución en las condiciones establecidas por el Código Civil y con las responsabilidades que él determina, pudiendo representarla en juicio, sea como demandante o demandada y transigir o celebrar arreglos judiciales o extrajudiciales, y adoptar las medidas que estime necesarias para la debida prestación de los servicios a su cargo, con arreglo a las disposiciones de la presente ley, a las reglamentaciones en vigor o que en lo sucesivo apruebe el Poder Ejecutivo;
- b) Celebrar convenios de compraventa o locación de bienes muebles o inmuebles, aceptar donaciones, celebrar contratos para la adquisición de materiales, ejecución de obras y prestación de servicios, con licitación pública o sin ella, de acuerdo con las leyes de contabilidad y de obras públicas;
- c) Proyectar anualmente el presupuesto de gastos y cálculos de recursos de la institución, así como el plan de trabajos públicos y los correspondientes reajustes de todos ellos, para su elevación al Poder Ejecutivo nacional;
- d) Proponer al Poder Ejecutivo la fijación de la tarifa para el cobro de los servicios que presta la institución;
- e) Promover ante las autoridades provinciales y municipales las tramitaciones tendientes al acogimiento de las ciudades y pueblos del interior del país, al régimen de la presente ley.

Art. 5º — Será dirigida por un Consejo de Administración presidido por un administrador general e integrado por los directores generales: técnico, de explotación comercial, de finanzas y contabilidad, de asuntos jurídicos, y de personal y asistencia social, nombrados por el Poder Ejecutivo.

Los directores generales técnico y de explotación comercial, reemplazarán en este orden, al presidente, en caso de vacancia, ausencia o imposibilidad temporaria del titular.

Art. 6º — Corresponde al Consejo de Administración la resolución de los siguientes asuntos:

- a) Aprobación del presupuesto general de gastos y cálculo de recurso y de la memoria anual;
- b) Aprobación de proyectos y presupuestos de obras y determinación de la oportunidad y forma, por administración o por contrato, de ejecución de las mismas;
- c) Aprobación de pliegos de condiciones y especificaciones para licitar la construcción de obras y ejecución de trabajos o servicios, y para la compraventa de materiales, artefactos, maquinarias, etcétera, y su adjudicación, o la adjudicación o compra directa de los mismos y todo lo concerniente al cumplimiento de los contratos emergentes en los casos en que su importe exceda de veinte mil pesos moneda nacional (\$ 20.000 m/n.);
- d) Organización y distribución de las dependencias de la repartición;
- e) Formulación de los reglamentos internos y de los que deban someterse a la aprobación del Poder Ejecutivo;
- f) Determinación de las tarifas para el cobro de los servicios prestados;
- g) Compraventa y locación de inmuebles, expropiaciones y servidumbres;
- h) Adquisición de obras e instalaciones de provisión de agua y desagüe cloacal;
- i) Confección del plan anual de trabajos públicos;
- j) Celebración de arreglos judiciales o extrajudiciales y transacciones;
- k) Aceptar donaciones;
- l) Consideración de todo otro asunto que someta a su consideración el presidente.

Las resoluciones del Consejo de Administración serán adoptadas por mayoría de votos presentes, teniendo el administrador general doble voto en caso de empate. Si el administrador general estuviera en desacuerdo con lo resuelto por la mayoría del consejo, el asunto será llevado al Poder Ejecutivo, el que resolverá en definitiva.

Art. 7º — El administrador general tiene a su cargo la parte ejecutiva de la repartición, ejerce su representación legal y administrativa y le corresponde resolver los asuntos no reservados para el Consejo de Administración.

Art. 8º — El administrador general podrá delegar en las dependencias principales de la administración la adopción de resoluciones en cuanto se trate de la simple aplicación de normas establecidas en leyes o reglamentos y no comprometan el patrimonio de la repartición.

Aplicabilidad de la presente ley y régimen de convención

Art. 9º — Las disposiciones de la presente ley serán aplicables, desde su promulgación en la Capital Federal, territorios nacionales y poblaciones de provincias en las cuales Obras Sanitarias de la Nación presta ya los servicios a que se refiere el artículo 2º.

Art. 10. — La incorporación de nuevas ciudades y pueblos de provincias al régimen establecido en la presente ley, se producirá mediante el siguiente procedimiento: las Legislaturas sancionarán leyes que declaren con carácter general el acogimiento de la provincia y acuerden a las municipalidades respectivas, la facultad de acogerse en cada caso particular; una vez producida la expresión de voluntad de la municipalidad o bien de la autoridad que haga sus veces, en caso de que no existiera organismo comunal con facultades suficientes, el Poder Ejecutivo provincial declarará por decreto el acogimiento, con lo que quedará perfeccionado el vínculo contractual sobre la base de las disposiciones de la presente ley y reglamentación complementaria.

Art. 14. — Transcurrido el término de tres años, a contar de la fecha del acto que declare su acogimiento a la presente ley, sin que se hubiere dado comienzo a la ejecución de las obras, la municipalidad respectiva podrá desistir del mismo, a cuyo efecto dictará la ordenanza correspondiente y la comunicará a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación.

Si el proyecto de las obras estuviera ya perfeccionado, la municipalidad deberá reintegrar su costo a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación en caso de que lo utilice para la construcción de las obras.

Art. 15. — Cumplida la tramitación prescrita en el artículo 10, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación efectuará los estudios y formulará el proyecto respectivo, el que será aprobado en la forma que establece el artículo 6º.

Art. 16. — Mientras las obras construídas no hayan sido entregadas a las autoridades provinciales o municipales en virtud de lo que establecen los artículos 53 y 55, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, ejecutará las obras de ampliación, renovación y mejoramiento que el buen servicio haga necesarias.

Art. 17. — Desde la fecha del acogimiento de las ciudades y pueblos al régimen de la presente ley, no podrán otorgarse en los mismos concesiones para la prestación de los servicios de provisión de agua y desagüe cloacal que ella contempla, ni prestarse por instituciones provinciales o municipales; pero en las localidades donde ya exista una concesión particular, podrá

convenirse la subsistencia de la misma contemporáneamente con la prestación que la Nación toma a su cargo, siempre que el radio de acción se delimite en forma de que no se produzcan superposiciones.

Régimen financiero

Art. 18. — Los ejercicios financieros, las rendiciones de cuentas y la inspección de la contabilidad de la institución, se sujetarán a las disposiciones de la ley de contabilidad con la intervención pertinente de la Contaduría General de la Nación. Dentro del primer semestre de cada año, el presidente presentará al Poder Ejecutivo la memoria correspondiente al ejercicio anterior.

Art. 19. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación tendrá siempre sus depósitos en el Banco Central de la República o en el establecimiento que éste determine, en cuenta corriente o a plazo fijo, y queda autorizada a adquirir títulos de la deuda pública de la Nación, con intervención del Ministerio de Hacienda o el de Finanzas, siempre que la operación resulte conveniente para evitar pérdidas de intereses.

Art. 20. — No podrá apartarse de las autorizaciones de gastos contenidas en su presupuesto general aprobado, ni alterar los sueldos en forma alguna, directa o indirectamente, sin autorización del Poder Ejecutivo en cada caso.

Art. 21. — Para los gastos que demanden los estudios, proyectos, construcción, renovación y ampliación de las obras, créase un crédito global de \$ 200.000.000 m/n. por año, que se considerará incluído en las leyes 12.576 y 12.815 para ser atendido con el producido de la emisión de títulos. No se operará el arrastre de dicho crédito, debiendo cancelarse los excedentes anuales que se produzcan.

El Poder Ejecutivo, por conducto de los departamentos de Obras Públicas y de Hacienda, fijará en un plan anual, que aprobará en particular para la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, las sumas a invertir en el ejercicio.

Una vez aprobado, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación quedará facultada para contratar la construcción de las obras y adquisición de materiales y elementos destinados a las mismas con arreglo a las disposiciones de las leyes de contabilidad y de obras públicas. La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación quedará facultada para contratar la construcción de las obras y adquisición de materiales y elementos destinados a las mismas con arreglo a las disposiciones de las leyes de contabilidad y de obras públicas. La Administración General de Obras Sanitarias de la

Nación podrá contratar la ejecución de obras y compra de materiales por sumas que excedan a las asignadas para el ejercicio, cuando se trate de trabajos cuya realización requiera más de un año, sin que excedan los créditos correspondientes a esos años futuros, pero sólo podrá invertir anualmente la cantidad fijada en el plan de trabajos.

Las sumas que con tales objetos se entreguen a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación se acreditarán en una cuenta especial. El servicio financiero de estas sumas se efectuará en la forma que más adelante se dispone.

Art. 22. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación atenderá los gastos de explotación y servicios financieros de las obras construídas en la Capital Federal y en las ciudades y pueblos de provincias y territorios nacionales, con los siguientes recursos:

- a) Los provenientes de las transferencias que efectúe la Dirección Inmobiliaria Nacional con arreglo a la ley 12.922 o las que las complementaren o substituyeren;
- b) La recaudación por otros conceptos en la Capital Federal, y por todos los servicios prestados en localidades del interior de acuerdo con las tarifas que fijará el Poder Ejecutivo nacional, inclusive los derechos de oficina que establezcan las reglamentaciones pertinentes;
- c) El importe de las multas y recargos que sean de aplicación de acuerdo con la presente ley y con los reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo nacional;
- d) El aporte de rentas generales que fije anualmente el presupuesto general de la Nación como compensación por tarifas de fomento, o servicios gratuitos en las localidades a que se refiere el artículo 56;
- e) Las donaciones y legados.

Si la suma de esos recursos no alcanzara a cubrir los egresos del ejercicio por concepto de gastos de explotación, el déficit que se produzca será atendido de rentas generales, con carácter de contribución no reintegrable. También se hará remisión a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación de los servicios financieros que haya dejado de cumplir en el año por falta de fondos.

En el presupuesto general de gastos de la Nación, se incluirán las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones precedentes.

Art. 23. — La suma entregada a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación para la construcción de obras de salubridad, fijada en la cantidad de \$ 448.058.215,89 al

31 de diciembre de 1939, por decreto 75.517, de fecha 26 de octubre de 1940, y las que con el mismo fin ha recibido con posterioridad y reciba en el futuro, devengarán un interés igual al menor nominal de los títulos de la deuda pública nacional y su importe será reintegrado por aquella institución mediante la entrega de una cuota del 2 % anual, no acumulativa. Los intereses de esas sumas comenzarán a correr el 1º de enero del año siguiente al de su entrega.

Por los capitales entregados con destino a estudios y construcción de obras, el reintegro comenzará a computarse una vez puestas en explotación las mismas obras; hasta ese momento, los referidos capitales sólo devengarán intereses.

Declárase cancelada la deuda de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación con el gobierno nacional por servicios de amortización e intereses no pagados y las sumas recibidas para costear los déficit de explotación. La presente cancelación de deuda se aplicará con relación a la cuenta global que se crea por el artículo 21, pero no tendrá efecto respecto de las cuentas singulares a que se refiere el artículo 53.

Art. 24. — Si en el ejercicio de un año la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación alcanza a cubrir los gastos industriales, los intereses correspondientes y la cuenta de reintegro, el excedente será destinado en el año siguiente a la construcción de nuevas obras o a la renovación, ampliación y mejoramiento de las existentes, a cuyo efecto se incluirán las partidas respectivas en el plan correspondiente.

Régimen de explotación

Art. 25. — Si el 1º de enero de cada año no se hallare sancionado el presupuesto general de gastos y recursos de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, o el Poder Ejecutivo no hubiera acordado la autorización prevista en el artículo 16 de la ley 12.961, se considerará prorrogado el vigente para el año anterior.

Art. 26. — Producida la aprobación expresa de su presupuesto o la prórroga automática prevista en el artículo precedente, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación quedará facultada para realizar la adquisición de los materiales y elementos y celebrar las contrataciones que requiera la explotación de los servicios con arreglo a las leyes de contabilidad y de obras públicas.

Art. 27. — En todos los distritos con obras en construcción o explotación, regirán los reglamentos y disposiciones que hayan dictado para los servicios sanitarios de la ciudad de Buenos Aires el Poder Ejecutivo o la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, como así también las disposiciones legales o reglamentarias referentes a los establecimientos in-

dustriales. Las modificaciones que en el futuro introduzcan a las mismas el Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo nacional o la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, cada una en la esfera de su competencia, tendrán carácter de obligatorias en todos los distritos en cuanto sean de aplicación en ellos.

Art. 28. — A requerimiento de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, las empresas de servicios públicos, instituciones o particulares que hagan uso u ocupen el suelo y subsuelo, removerán sus instalaciones cuando sea necesario para la construcción o explotación de las obras previstas en la presente ley. Los gastos que esos trabajos demanden serán abonados por la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, salvo que los concesionarios se hallen obligados a soportarlos, porque así lo establezcan sus respectivos contratos de concesión. La remoción de las instalaciones de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación será costeadada por quienes la soliciten.

Art. 29. — La dotación de los servicios de agua y desagüe cloacal, será obligatoria para todo inmueble habitable comprendido dentro del área donde se hayan instalado las cañerías de distribución de agua y las colectoras de cloacas. También deberá dotarse de esos servicios a los inmuebles que sin ser habitables por personas se utilicen para estabular.

Art. 30. — Las obras domiciliarias externas serán construídas por la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, y las obras internas por los propietarios. Las conexiones serán costeadas por la citada repartición, salvo las excepciones que establezca la reglamentación.

Art. 31. — Los propietarios o poseedores estarán obligados a instalar los servicios de agua y desagüe cloacal y a mantener en buen estado las instalaciones.

Los trabajos se ejecutarán con intervención y aprobación de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación. Los empleados autorizados para vigilar y dirigir los trabajos domiciliarios o inspeccionar las instalaciones tendrán acceso a los inmuebles, con las limitaciones que fije la reglamentación. Cuando se opusiere resistencia, el administrador general o el jefe del distrito local pedirá el auxilio de la fuerza pública, el que será acordado por las autoridades policiales.

Art. 32. — Desde la fecha en que se inicie la construcción de las obras queda prohibida la perforación de pozos a cualquier profundidad, sin permiso previo de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, dentro del radio servido, o a una distancia inferior a 500 metros de cualquier fuente de provisión de agua.

Los pozos existentes dentro del radio servido cuyas aguas se utilicen para la bebida, deberán ser cegados bajo la inspección de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, una vez habilitada la provisión de agua. La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación podrá autorizar la conservación de aquellos pozos cuya agua se utilice para riego o para industrias ajenas a la alimentación de las personas, cuando no constituyan un peligro para las demás napas subterráneas. Los pozos existentes dentro del radio de 500 metros de las fuentes de provisión de agua, deberán ser cegados si existiera peligro de contaminación de éstas.

Art. 33. — En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 31 y 32, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación podrá proceder de oficio a la obturación de los pozos y a construir o reparar las obras internas, así como a reconstruirlas si hubieran sido mal ejecutadas por cuenta de los propietarios o poseedores y con el auxilio de la fuerza pública, el que será prestado en la forma prevista en el artículo 31.

Art. 34. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación está autorizada a tomar las medidas necesarias para sanear los cursos de agua, en caso de que pudieran afectar la salubridad de las ciudades o pueblos en que preste sus servicios, y para impedir la contaminación directa o indirecta de las fuentes de provisión de agua que utilice, y queda facultada para disponer la clausura de los establecimientos industriales cuyos dueños no dieren cumplimiento a las disposiciones que ordene.

Art. 35. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación ejercerá la vigilancia del vertimiento de líquidos residuales transportados por vehículos en las localidades donde presta servicios, con sujeción a los reglamentos que dicte.

Art. 36. — Tanto la provisión de agua a la población como el desagüe de las aguas servidas están previstos para los usos ordinarios dentro de los inmuebles, no comprendiéndose en tal carácter el uso del agua para riego, o para las industrias que no elaboran artículos alimenticios, ni el desagüe de establecimientos industriales.

Art. 37. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación queda facultada para imponer penas pecuniarias que no excedan de \$ 1.000, a los propietarios que no cumplan con las obligaciones establecidas en la presente ley o en el reglamento para la construcción y funcionamiento de las obras domiciliarias. Estas multas podrán ser hasta de \$ 10.000, en caso de establecimientos industriales.

Los importes recaudados por la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación en concepto de multas, se incorporarán a su renta, como compensación de los gastos que originen las funciones de inspección y contralor que la presente ley pone a su cargo.

Art. 38. — Todo inmueble ubicado en las zonas dotadas de servicio, aun cuando carezca de instalaciones domiciliarias, estará obligado a abonar las cuotas que correspondan con arreglo a las tarifas. Este pago será obligatorio también para los inmuebles que estén desocupados.

Las tarifas serán iguales para todos los distritos y estarán sujetas a las rebajas, aumentos y modificaciones que apruebe el Poder Ejecutivo nacional.

Art. 39. — Todos los inmuebles edificados de propiedad de la Nación, de las provincias o de los municipios, cualquiera sea la índole de su ocupación, abonarán los servicios de acuerdo con las tarifas. Los servicios de agua y de cloacas no se cobrarán cuando dichos inmuebles carezcan de las instalaciones domiciliarias.

Las municipalidades deberán abonar el agua corriente que utilicen para riego y limpieza de calles, plazas y paseos públicos, con arreglo a la tarifa uniforme que apruebe el Poder Ejecutivo nacional.

Art. 41. — Los terrenos baldíos de propiedad de la Nación, de las provincias y de las municipalidades, estarán eximidos del pago de las cuotas de desagüe pluvial. También estarán exentos del pago de los servicios de agua y de desagües cloacales, cuando carezcan de las conexiones respectivas.

Art. 42. — Los importes de las boletas por servicios sanitarios y demás cuentas que emita la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, cuyo pago no se efectúe en la época establecida al efecto, serán gravados con un recargo del 3 % por cada mes de atraso, hasta un máximo del 15 %, luego de lo cual serán pasadas a cobro por vía de apremio con dicho recargo del 15 % sobre su importe. Los valores correspondientes al servicio de agua para construcción, en lugar del recargo progresivo anterior, sufrirán un recargo fijo del 25 % sobre su importe.

Las sumas recaudadas en concepto de recargo tendrán el carácter de compensatorias de los mayores gastos originados por la falta de percepción en oportunidad del importe de los servicios.

Los recargos establecidos en el presente artículo no se aplicarán a las cuentas correspondientes a inmuebles de propiedad de la Nación, de las provincias o de las municipalidades.

Art. 43. — Los inmuebles en los cuales la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación hubiere construido obras, conforme se

establece en el artículo 51, por cuenta de los propietarios, y los que adeuden servicios, multas y cualquier otra suma de acuerdo con las disposiciones de esta ley, quedarán afectados al pago de la deuda hasta su cancelación. El crédito correspondiente a las obras mencionadas, tendrá el privilegio establecido en el artículo 3.931 del Código Civil; el correspondiente al servicio y sus recargos tendrá el establecido en los artículos 3.879, inciso 2º, y 3.880, inciso 5º, del mismo código. Ambos privarán sobre el crédito hipotecario posterior a las construcciones o a la prestación de los servicios, respectivamente.

Art. 44. — Antes de escriturarse una transferencia de dominio o constitución de derechos reales, o de ordenarse la inscripción de una sentencia o auto judicial que declare o reconozca una transmisión de derechos sobre inmuebles, se requerirá de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación un certificado en el que conste la deuda que por cualquier concepto reconozca el inmueble de que se trate. Dicho certificado tendrá una validez de quince días, contados desde la fecha de su expedición.

Los escribanos públicos deberán incorporar dicho certificado al protocolo en caso de escrituración, así como la posterior constancia de pago, si éste resultare obligatorio según lo que se establece a continuación.

Art. 45. — El pago de los servicios, recargos y multas, como así también el de las cuotas vencidas en el caso de construcción de obras domiciliarias, se hará indefectiblemente y en su totalidad en toda clase de escrituras dentro de los diez días subsiguientes a su otorgamiento.

Para las cuotas no vencidas de la deuda por construcciones realizadas de acuerdo al artículo 51, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación podrá, previa solicitud de los interesados, autorizar que las facilidades de pago concedidas se mantengan, sea en favor del adquirente en caso de transferencia de dominio, sea del mismo propietario en caso de constitución de derechos reales.

Art. 46. — El Registro de la Propiedad de la Capital Federal y Territorios Nacionales, y los de las provincias, no inscribirán títulos de dominio o de constitución de derechos reales, sin la constancia, en los testimonios de las respectivas escrituras, de haberse abonado la deuda certificada por la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, o de haberse aceptado la substitución del deudor o el mantenimiento de las facilidades si se trata de deuda no vencida correspondiente a obras construidas conforme al artículo 51. El mismo requisito se exigirá en los oficios que ordenen la inscripción de declaratorias de herederos, testamentos, autos o sentencias que reconozcan, declaren o transfieran tales derechos.

Art. 47. — En las ciudades y pueblos de provincias y territorios nacionales será juez com-

petente para entender en las demandas que se inicien por cobros de las sumas que se adeuden de conformidad con la presente ley, el juez federal de sección o el juez letrado de territorio que corresponda.

La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación o el apoderado que ésta designe, intervendrá en dichos juicios como representante del fisco.

Art. 48. — El cobro de las cuentas se hará por vía de apremio que establece la ley nacional de procedimientos, sirviendo de suficiente título el certificado que expida la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, designando a los inmuebles deudores, y expresando la deuda que resulte de sus libros.

En este juicio no se admitirán otras excepciones que las de pago, prescripción, falsedad extrínseca del título y falta de personería, debiendo probarse la primera con los correspondientes recibos de pago.

No procederá en él la obligación de afianzar las resultados de juicios ordinarios.

Art. 50. — Las instalaciones o inmuebles de propiedad o en posesión de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, estarán exentos de todo impuesto, tasa, contribución de servicios y de mejoras, y de cualquier otro gravamen que hayan sancionado o sancionen la Nación, las provincias, sus municipalidades y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Régimen de construcción de obras domiciliarias con beneficio de su pago por cuotas mensuales

Art. 51. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación podrá construir obras domiciliarias de provisión de agua y desagüe cloacal a pedido y por cuenta de los propietarios, quienes las abonarán en 60 cuotas mensuales e iguales, incluyendo intereses del 5 % anual capitalizado semestralmente.

Art. 52. — Por los fondos suministrados o que se suministren en adelante a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación para la construcción de obras domiciliarias a plazos, no se computará la cuota de reintegro. Dichos fondos serán devueltos a la tesorería nacional a medida que resulten innecesarios. En concepto de intereses, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación liquidará al gobierno nacional las mismas sumas que perciba de los propietarios deudores.

Régimen de rescate de las obras

Art. 53. — Una vez reintegrado el costo de las obras construídas en localidades del interior, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación hará entrega de las mismas a las autoridades locales respectivas, a su requerimiento. En caso de no mediar tal requerimiento, la

explotación de los servicios seguirá a cargo de la citada repartición nacional, en las condiciones establecidas en la presente ley.

A los fines del presente artículo, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación llevará cuenta separada por cada ciudad o pueblo en que administre obras de salubridad, acreditará en ella los productos de la explotación y las amortizaciones extraordinarias que efectúen las autoridades locales y debitará los gastos industriales, intereses y cuotas de reintegro. Se entenderá reintegrado el costo de las obras construídas cuando los superávit anuales de esa cuenta alcancen a cubrir la totalidad de los capitales invertidos y las sumas empleadas para atender déficit de explotación que se hubieran producido.

La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación enviará a pedido de parte, a cada provincia y municipalidad interesada, el balance correspondiente al estado de la cuenta expresada.

Art. 54. — No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, no serán rescatables los servicios correspondientes a localidades que tengan obras comunes con las de la Capital Federal o que comprendan en una sola unidad técnica distritos ubicados en un territorio federal y una provincia, o en dos provincias, o en un punto cualquiera del territorio nacional y en un Estado extranjero.

Art. 55. — Los distritos o explotaciones que, correspondiendo a distintas ciudades o pueblos, constituyan por sus características un solo sistema, y no estén comprendidos en ninguno de los casos previstos en el artículo anterior, únicamente podrán ser rescatados una vez reintegrado el costo del conjunto de las obras que formen ese sistema.

Régimen de construcción de obras de carácter reducido

Art. 56. — En las localidades en las cuales por su escasa población o por falta de capacidad contributiva o por otras razones económicas, resulte inconveniente la instalación del servicio domiciliario de provisión de agua potable, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación establecerá un servicio provisional, a base de surtidores públicos, ubicados en el número y forma suficientes, para la provisión gratuita de agua a los habitantes de la localidad y podrá destinar el excedente de líquido que se produzca para el servicio de abrevaderos públicos de hacienda.

En casos muy especiales, de verdadera excepción, fundados en razones de orden sanitario o económico y cuando el caudal de agua lo permita, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación podrá conceder conexiones para el servicio domiciliario de determinados

establecimientos, cobrando por el mismo la retribución que fije la tarifa que establezca al efecto el Poder Ejecutivo.

Art. 57. — Si realizadas perforaciones el agua que se obtenga no resulte apta para el consumo humano, pero sí para otros usos domésticos o para abreviar hacienda, las instalaciones serán entregadas a la Dirección General de Agua y Energía Eléctrica o a las autoridades locales para su ulterior atención.

Cláusulas especiales

Art. 58. — Para determinar el orden de ejecución de los estudios y obras en las localidades del interior del país, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación tendrá en cuenta el número de habitantes y sus condiciones de salubridad, a cuyo efecto podrá solicitar el asesoramiento del Ministerio de Salud Pública.

Art. 59. — Cuando por razones de salubridad fuere necesario el abastecimiento de agua especialmente potable a núcleos de población situados dentro de las zonas de regadío servidas por obras de la Dirección General de Agua y Energía Eléctrica, la ejecución de las respectivas instalaciones y su explotación corresponderá a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación.

Art. 60. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación podrá convenir con otras reparticiones del Estado, de las provincias o de las municipalidades, ad referendum del Poder Ejecutivo nacional, la instalación de obras y prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable y de desagüe cloacal en determinadas zonas o poblaciones, para satisfacer principalmente necesidades derivadas de explotaciones industriales, ferroviarias, etcétera, quedando a cargo de las reparticiones beneficiadas la financiación de la construcción, mantenimiento y funcionamiento de las obras, total o parcialmente, conforme sea la extensión y carácter de los servicios.

Art. 61. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación estará exenta de todo derecho de aduana, básico o adicional, por la importación de útiles, maquinarias, medios de transporte y cualquier otro material que se destine a la construcción por administración o por contrato o a la explotación de sus obras y servicios.

Art. 62. — Las multas incurridas por falta de cumplimiento, total o parcial, de los contratos celebrados con la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, así como los depósitos dados en garantía cuya pérdida se produzca por las mismas causas, se incorporarán a su renta.

Art. 63. — Declárase de utilidad pública el suelo o el subsuelo de los terrenos de propiedad privada y las fuentes de provisión de agua que

sean necesarias para la ejecución de las obras que se construyan o amplíen en virtud de esta ley en todo el territorio de la Nación y queda autorizada la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación para proceder a su expropiación, de acuerdo con la ley de la materia.

Art. 64. — Las provincias y municipalidades entregarán a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, libre de todo cargo o gravamen, los terrenos y fuentes de provisión de agua que les pertenezcan y sean necesarios y constituirán las servidumbres que se requieran para la construcción, ampliación y explotación de las obras.

Art. 65. — Autorízase al Poder Ejecutivo a transferir a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, a título gratuito, los terrenos fiscales que sean necesarios para la ejecución de las obras previstas en esta ley, y concédese igual autorización para transferir con el mismo destino los terrenos municipales de la Capital Federal.

Art. 66. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, a solicitud de las autoridades locales y con autorización del Poder Ejecutivo, podrá tomar a su cargo, a medida que cuente con los recursos necesarios, las obras o instalaciones de provisión de agua y desagüe cloacal de propiedad provincial o municipal o de empresas privadas que actúen en virtud de concesiones, que sirvan a las ciudades y pueblos que se acojan al régimen de la presente ley.

En caso de que las obras o instalaciones fueran de propiedad provincial o municipal, deberán ser entregadas por sus autoridades sin cargo y su importe se acreditará en la cuenta patrimonial del distrito a formarse para la explotación de las mismas; sin embargo, ambas partes podrán convenir que Obras Sanitarias de la Nación se haga cargo de la deuda que hubiere contraído la autoridad local para construir las instalaciones que se transfieren, siempre que se trate de deuda no amortizada y que su monto no sea superior al valor físico de utilización de tales instalaciones que se determinará en la forma establecida en el apartado siguiente.

Si las obras o instalaciones fueran de pertenencia de empresas privadas, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación abonará por las mismas su valor físico de utilización, siempre que él sea inferior al costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión y los excedentes sobre una ganancia razonable, que serán considerados también como reintegración del capital invertido. En caso de que el costo de origen determinado en esa forma, sea inferior al del valor físico de utilización, sólo se abonará el importe de aquella determinación.

Entiéndase por valor físico de utilización el valor físico de origen de las instalaciones y maquinarias disminuído por la depreciación de uso, no contándose aquellas instalaciones y maquinarias que no sean utilizables para los nuevos servicios a prestar por la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación. La determinación de esos valores será efectuada por la citada repartición y sometida a la aprobación del Poder Ejecutivo nacional.

Las provincias y municipalidades deberán tomar a su exclusivo cargo el pago de toda suma que deba invertirse para la compra, rescate o expropiación de esas obras e instalaciones de propiedad privada, en cuanto exceda al valor físico de utilización.

Art. 67. — Serán conservadas en poder de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, las usinas construídas y en explotación por la misma para el exclusivo suministro de energía eléctrica a sus propias instalaciones; y podrá construir nuevas usinas, con iguales fines, cuando no existan en las localidades donde se disponga la realización de obras de saneamiento.

En aquellos casos en que exista la posibilidad de una utilización de la energía que emana de sus instalaciones específicas, las instalaciones energéticas podrán ser proyectadas y realizadas por la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación. El sobrante de la energía generada, después de satisfacer las necesidades propias, podrá ser enajenado, debiendo hacerlo con preferencia o exclusividad, según los casos, a la Dirección General de Agua y Energía Eléctrica.

Art. 68. — En los territorios nacionales, toda fundación de nuevos centros de población quedará supeditada al dictamen favorable de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, sobre la posibilidad de un adecuado aprovisionamiento de agua potable.

Art. 69. — Quedan derogadas todas las disposiciones legales o reglamentarias en cuanto se opongan a la presente ley, y, en particular, al artículo 172 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto, edición 1943.

Disposición de emergencia

Art. 70. — Decláranse hechos con facultades suficientes, en cuanto no hayan excedido las que la ley 8.889 otorgaba al extinguido directorio, los actos realizados por Obras Sanitarias de la Nación, o por la Administración Nacional del Agua con respecto a los servicios y obras que competen específicamente a dicha repartición y que hayan sido dispuestos por autoridades y funcionarios que en virtud de decretos del Poder Ejecutivo nacional substituyeron al directorio, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran haber incurrido esas auto-

ridades y funcionarios por inobservancia de otras leyes o reglamentos.

ANTECEDENTES

I

Informe

La Comisión de Obras Públicas ha estudiado detenidamente el mensaje y proyecto de ley orgánica para la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, que fuera remitido por el Poder Ejecutivo el año próximo pasado y a poco antes de finalizar el período parlamentario.

El proyecto de ley en causa refunde en un solo cuerpo todas las leyes y disposiciones que han fijado hasta hoy el régimen legal de organización y funcionamiento de Obras Sanitarias de la Nación, entre ellas las números: 1.917, de provisión de agua a Buenos Aires; 2.797, sobre vertimientos de líquidos residuales en los ríos de la República; 8.889, de creación de Obras Sanitarias de la Nación; 10.998, de construcción de obras sanitarias en ciudades y pueblos de la República; 11.744, sobre construcción de desagües pluviales en la Capital Federal; 12.140, modificatoria de la ley 10.998, y principalmente los decretos leyes siguientes: 33.425/44, de creación de la Administración Nacional del Agua, en lo referente a servicios sanitarios; 29.878/45, que reglamenta y amplía la anterior.

El proyecto de ley trae un fundamental cambio de procedimientos para convenir con las autoridades del interior la construcción de las obras de saneamiento, para quedar ahora automáticamente convenidas las condiciones de construcción y explotación de los servicios y todo aquello a cargo de Obras Sanitarias de la Nación; modificaciones éstas, como otras que se han introducido, inspiradas en la necesidad de adaptar el funcionamiento de esa repartición a la nueva orientación dada por el gobierno nacional en materia administrativa.

Con anterioridad, en virtud de lo que establecían las leyes respectivas, para cada obra del interior debía celebrarse un convenio que contenía: a) el proyecto; b) el régimen de explotación; c) las tarifas. Luego este convenio debía ser aprobado por ordenanza municipal, por ley provincial y por último por decreto del Poder Ejecutivo nacional. Cualquier modificación que se hiciera al proyecto, ya sea una simple ampliación del régimen de explotación de tarifas, obligaba a celebrar un nuevo convenio con igual trámite, lo que se traducía en una lentísima tramitación que conspiraba contra la eficiencia misma de los servicios e imposibilitaba la adopción de soluciones rápidas en caso de urgencia.

La práctica demostró que esa tramitación, además de excesiva, era inútil: 1º en cuanto al proyecto, porque se trataba de considerar el aspecto técnico, y a este respecto poco podían agregar las autoridades locales a las determinaciones de la repartición especializada; 2º en lo referente al régimen de explotación, porque resultaba igual para todas las localidades del interior hasta el punto de que fué necesario, que el directorio de Obras Sanitarias de la Nación aprobara las cláusulas generales de los convenios, que se incorporaron a todos los acuerdos celebrados con posterioridad; 3º en cuanto a tarifas,

porque la tendencia que quedó sancionada con la ley 12.140 (artículo 1º) y con la ley 12.345 (artículo 187) era la de equiparar todas las tarifas a las de la Capital Federal.

Los aspectos principales del proyecto de ley son los siguientes:

Denominación (artículo 1º). — Se conserva el nombre tradicional de Obras Sanitarias de la Nación.

Objeto de la institución (artículo 2º). — Además de la provisión de agua y el saneamiento urbano, se la faculta a la repartición para producir materia prima o materiales elaborados que necesite.

Organización (Artículos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º). — Se substituye el directorio, por un consejo de administración de carácter técnico, como que está formado por los jefes de las principales dependencias.

Se suprime la facultad de designar y remover al personal, para ajustarse a lo establecido en la nueva ley de contabilidad.

Se mantiene la superintendencia del Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Obras Públicas.

Se limitan las facultades del consejo, de las del presidente y se autoriza a éste para delegar funciones de menor importancia.

Aplicabilidad de la ley (artículo 9º). — En la Capital Federal y territorios nacionales, el Congreso actúa como Legislatura local, de manera que en ellos, la ley es de aplicación inmediata.

Régimen de convención (artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17). — En cambio en las provincias, es necesaria la expresión de voluntad de las autoridades locales en el sentido de que acepten el régimen creado por esta ley.

Anteriormente, para esa expresión de voluntad, se firmaba un convenio por localidad, lo que se traducía en un trámite engorroso y lento. Este proyecto cambia el procedimiento y lo reemplaza por un acogimiento que en realidad, tiene el mismo valor de un contrato. Las diversas disposiciones de este artículo, contemplan situaciones originadas por las leyes que autorizaron las distintas obras del interior.

Régimen financiero (artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24). — A las diversas disposiciones sobre autarquía financiera, que ya figuraban en la ley 8.889, se agrega la creación de un crédito global anual de \$ 200.000.000 moneda nacional, para el plan ordinario de trabajos públicos, con el que se costearán los inconvenientes que origina el defecto de algunas autorizaciones de créditos legales hechas en la ley 12.815. En esta forma, toda obra que figura en el plan de trabajos públicos, aprobado por el Poder Ejecutivo, tendrá crédito legal.

Además se determina la forma de amortización de la deuda atrasada de Obras Sanitarias de la Nación con la Nación y se fija un interés igual al menor nominal de los títulos de la deuda pública.

Régimen de explotación (artículos 25 a 50). — Se establece la prórroga automática del presupuesto del ejercicio anterior, para el caso de que el Honorable Congreso no hubiera sancionado el del nuevo año, ni el Poder Ejecutivo hubiera dispuesto la aplicación de duodécimos. Esta disposición se justifica, porque por su índole estos servicios no admiten interrupción.

Se establece también, en este capítulo, la uniformidad de reglamentos y tarifas para todo el país y se consignan numerosas disposiciones que en gran parte se encuentran en vigor en la Capital Federal y en localidades del interior con convenios firmados.

La enunciación de estas cláusulas obedece a la necesidad de que los acogimientos a esta ley por las autoridades del interior, comprendan también todos los aspectos contemplados en ellos.

En el trabajo analítico que sigue a este informe, se indica el origen de cada disposición.

Construcción de obras domiciliarias a plazo (artículos 51 y 52). — Se mantiene la ayuda al pequeño propietario para que instale en forma cómoda estos servicios, cuyo costo es bastante elevado.

Régimen de rescate de las obras (artículos 53, 54 y 55). — Las obras del interior, que por su índole son de carácter municipal, se entregarán a las autoridades locales una vez terminadas, salvo que éstas deseen que Obras Sanitarias de la Nación, que es una repartición especializada, prosiga con la explotación.

Se exceptuarán del rescate las instalaciones unidas a la Capital Federal, porque ellas constituyen una unidad técnica funcional y no se podrían separar sus explotaciones.

Obras de carácter reducido y gratuito (artículos 56 y 57). — Se trata de obras de fomento para el arraigo de poblaciones, que ya se encuentran autorizadas por la ley 12.140. Se suprime el límite de la inversión que no puede respetarse en todos los casos y que obliga a negar ese beneficio a muchos de los núcleos urbanos más necesitados de la ayuda de la Nación.

Cláusulas especiales (artículos 58 a 69). — Se incluyen diversas disposiciones complementarias de las anteriores y destinadas a facilitar la actuación de la repartición sobre:

- 58 Orden de prelación de los estudios de las obras.
- 59 Obras de provisión de agua en zonas de riego.
- 60 Obras de provisión de agua o saneamiento en beneficio exclusivo de otras dependencias.
- 61 Exención de derecho de aduana y adicionales.
- 62 Ingreso de las multas por infracciones e incumplimiento de contratos.
- 63 Declaración de utilidad pública y autorización para expropiar.
- 64 Entrega de terrenos y fuentes de provisión de agua.
- 65 Transferencias de propiedades fiscales.
- 66 Adquisición de instalaciones de propiedad privada.
- 67 Conservación de usinas eléctricas para uso exclusivo de la repartición.
- 68 Creación de nuevos centros de población, previo dictamen de Obras Sanitarias de la Nación.
- 69 Derogación de disposiciones.

Disposiciones de emergencia (artículo 70). — Tienen por objeto regularizar la situación de los funcionarios y autoridades que reemplacen al extinguido directorio, en lo referente sólo a las facultades con que han actuado y sin perjuicio a las responsabilidades en que hayan incurrido en esas causas.

Para facilitar a los señores diputados el estudio de este proyecto de ley, se agrega un análisis al mismo en el que se indica la fuente de cada artículo y se consigna el fundamento cuando modifica lo establecido en leyes anteriores o bien crea una nueva norma.

Al entregar este proyecto de ley a la consideración de la Honorable Cámara, con el más amplio ele-

mento de juicio, espero prestará su sanción favorable a fin de entregar al Poder Ejecutivo un instrumento legal de gobierno de verdadera importancia y que no debe ser retardado por mayor tiempo.

José Marotta.

II

Buenos Aires, 4 de septiembre de 1947.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el honor de someter a la consideración de vuestra honorabilidad el proyecto de ley orgánica para la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación.

Sancionada en el mes de julio de 1912 la ley 8.889, que creó la repartición denominada Obras Sanitarias de la Nación para substituir a las Obras de Salubridad de la Nación, constituyó aquella su estatuto legal, en sus líneas principales, hasta el 14 de julio de 1943, fecha en que, por decreto 2.743 se substituyó el directorio instituido por la citada ley 8.889 para el gobierno de la repartición por un consejo de administración, y modificó su nombre atribuyéndole el de Administración General de Obras Sanitarias de la Nación.

Posteriormente, por decreto 33.425, en acuerdo general de ministros, de 11 de diciembre de 1944, se creó la Administración Nacional de Agua sobre la base de la refundición de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación y de la Dirección General de Irrigación. Por dicho acto, se introdujeron substanciales modificaciones en el régimen legal vigente hasta entonces, tanto en el orden financiero como en el convencional que rigió la construcción y explotación de obras en el interior del país; y por último, el decreto 3.121, también en acuerdo general de ministros de 3 de febrero próximo pasado, complementado por un acto posterior dispuso el desdoblamiento de las citadas reparticiones, pasando la anterior Dirección General de Irrigación a depender de la Secretaría de Industria y Comercio para integrar la Dirección General de Agua y Energía Eléctrica.

La breve exposición de los antecedentes relatados fundamenta acabadamente la necesidad urgente de encarar la sanción de una nueva ley para regular de manera orgánica y permanente la dirección y desenvolvimiento de la repartición y, esa necesidad, adquiere mayor significación si se tiene presente la índole de los servicios que aquella está llamada a prestar.

El conjunto de cláusulas que componen el proyecto es el fruto de un estudio meditado, a cuyo servicio ha sido puesta la vasta experiencia acumulada durante la prolongada existencia de la repartición especializada. Constituye un ordenamiento armónico que permitirá desenvolver una gestión de provecho en orden a la consecución del elevado fin de mejorar las condiciones de vida de sectores importantes de nuestro pueblo, preocupación principal del superior gobierno, mediante el saneamiento de los numerosísimos núcleos dispersos en el dilatado suelo del país, que soportan una existencia precaria por la escasez y aun la falta de elementos consubstanciales con la vida humana. Sus previsiones aseguran la posibilidad de construir y explotar sus propias instalaciones

y también la de atender, con eficacia, las que se realicen en la ejecución de la obra de civilización y progreso del plan de gobierno y que ulteriormente se acuerde confiarlas a esta institución para su funcionamiento y cuidado.

Su sanción se conceptúa urgente y se requiere que vuestra honorabilidad la considere muy especialmente. Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN PERÓN.
Juan Pistarini.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Institución

Artículo 1º — La actual Administración General de Obras Sanitarias de la Nación constituirá una institución dependiente del Ministerio de Obras Públicas, que se regirá por las disposiciones de la presente ley, conservando su actual denominación.

Objeto de la institución

Art. 2º — Corresponde a la misma el estudio, proyecto, construcción, renovación, ampliación y explotación de las obras de provisión de agua y saneamiento urbano en la Capital Federal y ciudades y pueblos de la República, y la exploración, alumbramiento y utilización de las aguas subterráneas; cuya ejecución sea dispuesta por el Poder Ejecutivo en las condiciones que más adelante se establecen.

El Poder Ejecutivo podrá autorizar a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación a establecer industrias para extraer o producir la materia prima o los materiales elaborados necesarios para sus servicios, o bien a participar en empresas de capital mixto que persigan el mismo objeto.

Las obras ya construidas que se incorporen al régimen de la presente ley y las comprendidas en las previsiones del artículo 13, serán explotadas por la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación.

Organización, atribuciones y deberes y autoridades

Art. 3º — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación funcionará con la autarquía que le atribuye la presente ley, pero el Poder Ejecutivo ejercerá sobre ella la superintendencia necesaria para el debido control de su funcionamiento y podrá intervenirla cuando las exigencias del buen servicio lo hicieran indispensable.

La superintendencia prevista en el párrafo precedente se ejercerá sin perjuicio de las facultades que correspondan a la Contaduría General de la Nación por la ley de contabilidad y demás vigentes, salvo en cuanto hayan quedado modificadas por la presente.

Art. 4º — Para el cumplimiento de los fines consignados en el artículo 2º, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación tendrá las siguientes facultades:

a) Administrar los bienes e instalaciones pertenecientes a la institución, en las condiciones

establecidas por el Código Civil y con las responsabilidades que él determina, pudiendo representarla en juicio, sea como demandante o demandada y transigir o celebrar arreglos judiciales o extrajudiciales; y adoptar las medidas que estime necesarias para la debida prestación de los servicios a su cargo, con arreglo a las disposiciones de la presente ley y las reglamentaciones en vigor o que en lo sucesivo apruebe el Poder Ejecutivo;

- b) Celebrar convenios de compraventa o locación de bienes muebles o inmuebles, así como los contratos para la adquisición de materiales o ejecución de obras, con licitación pública o sin ella, de acuerdo con las leyes de contabilidad y de obras públicas;
- c) Proyectar anualmente el presupuesto de gastos y cálculos de recursos de la institución, así como el plan de trabajos públicos y los correspondientes reajustes de todos ellos, para su elevación al Poder Ejecutivo nacional;
- d) Proponer al Poder Ejecutivo la fijación de la tarifa para el cobro de los servicios que presta la institución;
- e) Promover ante las autoridades provinciales y municipales las tramitaciones tendientes al acogimiento de las ciudades y pueblos del interior del país al régimen de la presente ley.

Art. 5º — Será dirigida por un consejo de administración, presidido por un funcionario con la denominación de administrador general, que será nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado; e integrado por los directores generales Técnico, de Explotación Comercial, de Finanzas y Contabilidad, de Asuntos Jurídicos y de Personal y Asistencia Social.

Los directores generales Técnico y de Explotación Comercial reemplazarán, en este orden, al administrador general, en caso de vacancia o ausencia o imposibilidad temporaria del titular.

Art. 6º — Corresponde al consejo de administración la resolución de los siguientes asuntos:

- a) Aprobación del presupuesto general de gastos y cálculo de recursos y de la memoria anual;
- b) Aprobación de proyectos y presupuestos de obras y determinación de la oportunidad y forma, por administración o por contrato, de ejecución de las mismas;
- c) Aprobación de pliegos de condiciones y especificaciones para licitar la construcción de obras y ejecución de trabajos o servicios, y para la compraventa de materiales, artefactos, maquinarias, etcétera y su adjudicación, o la adjudicación o compra directa de los mismos, y todo lo concerniente al cumplimiento de los contratos emergentes; en los casos en que su importe exceda de veinte mil pesos moneda nacional (\$ 20.000);
- d) Organización y distribución de las dependencias de la repartición;
- e) Formulación de los reglamentos internos y de los que deban someterse a la aprobación del Poder Ejecutivo;
- f) Determinación de las tarifas para el cobro de los servicios prestados;

- g) Compraventa y locación de inmuebles, expropiaciones y servidumbres;
- h) Adquisición de obras e instalaciones de provisión de agua y desagüe cloacal;
- i) Confección del plan anual de trabajos públicos;
- j) Celebración de arreglos judiciales y extrajudiciales y transacciones;
- k) Consideración de todo otro asunto que someta a su consideración el administrador general.

Las resoluciones del consejo de administración serán adoptadas por mayoría de votos presentes, teniendo el administrador general doble voto en caso de empate. Si el administrador general estuviera en desacuerdo con lo resuelto por la mayoría del consejo, el asunto será llevado al Poder Ejecutivo, el que resolverá en definitiva.

Art. 7º — El administrador general tiene a su cargo la parte ejecutiva de la repartición, ejerce su representación legal y administrativa y le corresponde resolver los asuntos no reservados para el consejo de administración.

Art. 8º — El administrador general podrá delegar en las dependencias principales de la administración la adopción de resoluciones en cuanto se trate de la simple aplicación de normas establecidas en leyes o reglamentos y no comprometan el patrimonio de la repartición.

Aplicabilidad de la presente ley y régimen de convención

Art. 9º — Las disposiciones de la presente ley serán aplicables desde su promulgación en la Capital Federal y en los territorios nacionales, sin necesidad de acogimiento expreso por parte de las autoridades comunales respectivas.

Art. 10. — La incorporación de nuevas ciudades y pueblos de provincias al régimen establecido en la presente ley, se producirá mediante el siguiente procedimiento: las legislaturas sancionarán leyes que declaren con carácter general el acogimiento de la provincia y acuerden a las municipalidades respectivas, no comprendidas en la ley 4.158, la facultad de acogerse en cada caso particular; una vez producida la expresión de voluntad de la municipalidad o bien de la autoridad que hace sus veces, en caso de que no existiera organismo comunal con facultades suficientes, el Poder Ejecutivo provincial declarará por decreto el acogimiento, con lo que quedará perfeccionado el vínculo contractual sobre la base de las disposiciones de la presente ley y reglamentación complementaria.

Art. 11. — Las obras construídas en virtud de la ley 4.158 quedarán incorporadas a la presente desde la sanción de la ley general provincial prevista en el artículo 10, y en cuanto a las ejecutadas, en construcción o proyectadas en las provincias de acuerdo con las leyes 10.998 y 12.140, desde que las municipalidades o la autoridad que haga sus veces expresen su voluntad de ser comprendidas en el régimen de esta ley y el Poder Ejecutivo provincial así lo declare por decreto.

Art. 12. — Las localidades de provincias acogidas oportunamente al régimen del decreto 33.425/44 y las obras ejecutadas en las mismas, quedarán comprendidas en lo establecido por la presente ley, en lo que respecta a las obras de saneamiento, una vez que las legislaturas locales y las municipalidades respectivas ratifiquen aquellos acogimientos. Para las

ciudades comprendidas en la ley 4.158 será suficiente la ratificación de las legislaturas.

Art. 13. — Mientras las obras a que se refieren los artículos 11 y 12 no se incorporen al régimen de la presente ley, continuarán en vigor, a su respecto, las disposiciones en virtud de las cuales ellas fueron autorizadas.

Art. 14. — Transcurrido el término de tres años a contar de la fecha del acto que declare su acogimiento a la presente ley, sin que se hubiere dado comienzo a la ejecución de las obras la municipalidad respectiva podrá desistir del mismo, a cuyo efecto dictará la ordenanza correspondiente y la comunicará a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación.

Si el proyecto de las obras estuviera ya confeccionado, la municipalidad deberá reintegrar su costo a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación en caso de que lo utilice para la construcción de las obras.

Art. 15. — Cumplida la tramitación prescrita en los artículos 10, 11 ó 12, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación efectuará los estudios y formulará el proyecto respectivo, el que será aprobado en la forma que establece el artículo 6º.

Art. 16. — Mientras las obras construidas no hayan sido entregadas a las autoridades provinciales o municipales en virtud de lo que establecen los artículos 53 y 55, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación ejecutará las obras de ampliación, renovación y mejoramiento que el buen servicio haga necesarias.

Art. 17. — Desde la fecha del acogimiento de las ciudades y pueblos al régimen de la presente ley, no podrán otorgarse en los mismos concesiones para la prestación de los servicios de provisión de agua y desagüe cloacal que ella contempla, ni prestarse por instituciones provinciales o municipales; pero en las localidades donde ya exista una concesión particular podrá convenirse la subsistencia de la misma contemporáneamente con la prestación que la Nación toma a su cargo, siempre que el radio de acción se delimite en forma de que no se produzcan superposiciones.

Régimen financiero

Art. 18. — Los ejercicios financieros, las rendiciones de cuentas y la inspección de la contabilidad de la institución, se sujetarán a las disposiciones de la ley de contabilidad, con la intervención pertinente de la Contaduría General de la Nación. Dentro del primer semestre de cada año, el administrador general presentará al Poder Ejecutivo la memoria correspondiente al ejercicio anterior.

Art. 19. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación tendrá siempre sus depósitos en el Banco Central de la República o en el establecimiento que éste determine, en cuenta corriente o a plazo fijo, y queda autorizada a adquirir títulos de la deuda pública de la Nación, con intervención del Ministerio de Hacienda, siempre que la operación resulte conveniente para evitar pérdidas de intereses.

Art. 20. — No podrá apartarse de las autorizaciones de gastos contenidas en su presupuesto general aprobado, ni alterar los sueldos en forma alguna, directa o indirectamente, sin autorización del Poder Ejecutivo en cada caso.

Art. 21. — Para los gastos que demanden los estudios, proyectos, construcción, renovación y ampliación de las obras, créase un crédito global de doscientos millones de pesos moneda nacional (\$ 200.000.000) por año, que se considerará incluido en las leyes 12.576 y 12.815 e incorporado al total de la suma que anualmente autorice a invertir en la ejecución de obras públicas el Honorable Congreso de la Nación, para ser atendida con el producido de la emisión de títulos. No se operará el arrastre de dicho crédito, debiendo cancelarse los excedentes anuales que se produzcan.

El Poder Ejecutivo, por conducto de los departamentos de Obras Públicas y de Hacienda, fijará en un plan anual, que aprobará en particular para la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, la suma a invertir en el ejercicio, dentro de la máxima establecida en el párrafo anterior. Una vez aprobado, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación quedará facultada para realizar y adjudicar las licitaciones para la construcción de obras y compra de los materiales destinados a las mismas, con arreglo a las disposiciones de las leyes de contabilidad y de obras públicas. La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación podrá contratar la ejecución de obras y compra de materiales por sumas que excedan a las asignadas para el ejercicio, cuando se trate de trabajos cuya realización requiera más de un año, sin que excedan los créditos correspondientes a esos años futuros, pero sólo podrá invertir anualmente la cantidad fijada en el plan de trabajos.

Las sumas que con tales objetos se entreguen a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación se acreditarán en una cuenta especial. El servicio financiero de estas sumas se efectuará en la forma que más adelante se dispone.

Art. 22. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación atenderá los gastos de explotación y servicios financieros de las obras construidas en la Capital Federal y en las ciudades y pueblos de las provincias y territorios, conforme con las leyes 4.158, 10.998 y 12.140 y de las de saneamiento ejecutadas con arreglo al decreto 33.425/44, así como de las que se construyan en virtud de las disposiciones de la presente ley, con los siguientes recursos:

- a) La recaudación, por todo concepto, de las mencionadas explotaciones;
- b) El aporte de rentas generales que fije anualmente el presupuesto general de la Nación;
- c) Las donaciones y legados.

Si la suma de esos recursos no alcanzara a cubrir los egresos del ejercicio por concepto de gastos de explotación, el déficit que se produzca será atendido de rentas generales, con carácter de contribución no reintegrable. También se hará remisión a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación de los servicios financieros que haya dejado de cumplir en el año por falta de fondos. En el presupuesto general de gastos de la Nación se incluirán las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones precedentes.

Art. 23. — La suma entregada a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación para la construcción de obras de salubridad, fijada en la cantidad de \$ 448.058,215,89 m/n. al 31 de diciembre

de 1939 por decreto 75.517, de fecha 26 de octubre de 1940, y las que con el mismo fin ha recibido con posterioridad y reciba en el futuro, devengarán un interés igual al menor nominal de los títulos de la deuda pública nacional y su importe será reintegrado por aquella institución mediante la entrega de una cuota del 2 % anual, no acumulativa. Los intereses de esas sumas comenzarán a correr el 1º de enero del año siguiente al de su entrega.

Por los capitales entregados con destino a estudios y construcción de obras, el reintegro comenzará a computarse una vez puestas en explotación las mismas obras; hasta ese momento, los referidos capitales sólo devengarán intereses.

Declárase cancelada la deuda de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación con el gobierno nacional por servicios de amortización e intereses no pagados y las sumas recibidas para costear los déficit de explotación. La presente cancelación de deuda se aplicará con relación a la cuenta global que se crea por el artículo 21, pero no tendrá efecto respecto de las cuentas singulares a que se refiere el artículo 53.

Art. 24. — Si en el ejercicio de un año la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación alcanza a cubrir los gastos industriales, los intereses correspondientes y la cuota de reintegro, el excedente será destinado en el año siguiente a la construcción de nuevas obras o a la renovación, ampliación y mejoramiento de las existentes, a cuyo efecto se incluirán las partidas respectivas en el plan correspondiente.

Régimen de explotación

Art. 25. — Si el 1º de enero de cada año no se hallare sancionado el presupuesto general de gastos y recursos de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, se considerará prorrogado el vigente para el año anterior.

Art. 26. — Producida la aprobación expresa de su presupuesto o la prórroga automática prevista en el artículo precedente, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación quedará facultada para realizar la adquisición de los materiales y elementos y celebrar las contrataciones que requiera la explotación de los servicios, con arreglo a las leyes de contabilidad y de obras públicas.

Art. 27. — En todos los distritos con obras en construcción o explotación, regirán los reglamentos y disposiciones que hayan dictado para los servicios sanitarios de la ciudad de Buenos Aires el Poder Ejecutivo o la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, como así también las disposiciones legales o reglamentarias referentes a los establecimientos industriales. Las modificaciones que en el futuro introduzcan a las mismas el Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo nacional o la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, cada una en la esfera de su competencia, tendrán carácter de obligatorias en todos los distritos en cuanto sean de aplicación en ellos.

Art. 28. — A requerimiento de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, las empresas de servicios públicos, instituciones o particulares que hagan uso u ocupen el suelo o subsuelo, removerán sus instalaciones cuando sea necesario para la construcción o explotación de las obras previstas en la presente ley. Los gastos que esos

trabajos demanden serán abonados por la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, salvo que los concesionarios se hallen obligados a soportarlos, porque así lo establezcan sus respectivos contratos de concesión. La remoción de las instalaciones de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación será costeadada por quienes la soliciten.

Art. 29. — La dotación de los servicios de agua y desagüe cloacal será obligatoria para todo inmueble habitable comprendido dentro del área donde se hayan instalado las cañerías de distribución de agua y las colectoras de cloacas. También deberá dotarse de esos servicios a los inmuebles que sin ser habitables por personas se utilicen como depósito de animales.

Art. 30. — Las obras domiciliarias externas serán construídas por la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, y las obras internas por los propietarios. Las conexiones serán costeadas por la citada repartición salvo las excepciones que establezca la reglamentación.

Art. 31. — Los propietarios o poseedores estarán obligados a instalar los servicios de agua y desagüe cloacal y a mantener en buen estado las instalaciones.

Los trabajos se ejecutarán con intervención y aprobación de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación. Los empleados autorizados para vigilar y dirigir los trabajos domiciliarios o inspeccionar las instalaciones, tendrán acceso a los inmuebles con las limitaciones que fije la reglamentación. Cuando se opusiere resistencia, el administrador general o el jefe del distrito local pedirá el auxilio de la fuerza pública, el que será acordado por las autoridades policiales.

Art. 32. — Desde la fecha en que se inicie la construcción de las obras queda prohibida la perforación de pozos, a cualquier profundidad, sin permiso previo de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, dentro del radio servido, o a una distancia inferior a 500 metros de cualquier fuente de provisión de agua.

Los pozos existentes dentro del radio servido cuyas aguas se utilicen para la bebida, deberán ser cegados bajo la inspección de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, una vez habilitada la provisión de agua. La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación podrá autorizar la conservación de aquellos pozos cuya agua se utilice para riego o para industrias ajenas a la alimentación de las personas, cuando no constituyan un peligro para las demás napas subterráneas. Los pozos existentes dentro del radio de 500 metros de las fuentes de provisión de agua, deberán ser cegados si existiera peligro de contaminación de éstas.

Art. 33. — En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 31 y 32, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación podrá proceder de oficio a la obturación de los pozos y a construir o reparar las obras internas, así como a reconstruirlas si hubieran sido mal ejecutadas, por cuenta de los propietarios o poseedores y con el auxilio de la fuerza pública, el que será prestado en la forma prevista en el artículo 31.

Art. 34. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación estará autorizada a tomar las medidas necesarias para sanear los cursos de agua, en caso de que pudieran afectar la salubridad.

de las ciudades o pueblos en que preste sus servicios y para impedir la contaminación directa o indirecta de las fuentes de provisión de agua que utilice, y queda facultada a disponer la clausura de los establecimientos industriales cuyos dueños no dieren cumplimiento a las disposiciones que ordene.

Art. 35. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación ejercerá la vigilancia del vertimiento de líquidos residuales transportados por vehículos en las localidades donde presta servicios, con sujeción a los reglamentos que dicte.

Art. 36. — Tanto la provisión de agua a la población como el desagüe de las aguas servidas, están previstos para los usos ordinarios dentro de los inmuebles, no comprendiéndose en tal carácter el uso del agua para riego o para las industrias que no elaboren artículos alimenticios ni el desagüe de establecimientos industriales.

Art. 37. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación estará facultada a imponer penas pecuniarias que no excedan de quinientos pesos moneda nacional (\$ 500) a los propietarios que no cumplan con las obligaciones establecidas en la presente ley o en el reglamento para la construcción y funcionamiento de las obras domiciliarias. Estas multas podrán ser hasta de un mil pesos moneda nacional (\$ 1.000), en el caso de establecimientos industriales.

Los importes recaudados por la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación en concepto de multas, se incorporarán a su renta, como compensación de los gastos que originen las funciones de inspección y contralor que la presente ley pone a su cargo.

Art. 38. — Todo inmueble ubicado en las zonas dotadas de servicio, aun cuando carezca de instalaciones domiciliarias, estará obligado a abonar las cuotas que correspondan con arreglo a las tarifas. Este pago será obligatorio también para los inmuebles que estén desocupados.

Las tarifas serán iguales para todos los distritos y estarán sujetas a las rebajas, aumentos y modificaciones que apruebe el Poder Ejecutivo nacional.

En la ciudad de Buenos Aires continuará la vigencia de las tarifas que fije el Poder Ejecutivo, hasta que comience la aplicación de las tasas establecidas en el decreto 33.405/44, de creación de la Dirección Inmobiliaria Nacional, ratificado por la ley 12.922.

Art. 39. — Todos los inmuebles edificados de propiedad de la Nación, de las provincias o de los municipios, cualquiera sea la índole de su ocupación, abonarán los servicios de acuerdo con las tarifas. Los servicios de agua y de cloacas no se cobrarán cuando dichos inmuebles carezcan de las instalaciones domiciliarias.

Las municipalidades deberán abonar el agua corriente que utilicen para riego y limpieza de calles, plazas y paseos públicos con arreglo a la tarifa uniforme que apruebe el Poder Ejecutivo nacional.

Art. 40. — No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires estará eximida del pago del servicio de agua que utilice para riego de las calles, plazas y paseos públicos, dentro de los límites que establezca la reglamentación que dicte la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación con acuerdo del Poder Ejecutivo. Igualmente estará eximida del pago de ese servicio y de los de desagüe cloacal y pluvial

que correspondan a las fincas de su propiedad ocupadas por sus oficinas o que estén afectadas a una función pública gratuita. Quedan, en cambio, obligadas al pago de los servicios todas las fincas que no estén en las condiciones antedichas.

Los servicios de agua y de cloacas no se cobrarán cuando dichos inmuebles carezcan de las instalaciones domiciliarias.

Art. 41. — Los terrenos baldíos de propiedad de la Nación, de las provincias y de las municipalidades, estarán eximidos del pago de las cuotas de desagüe pluvial. También estarán exentos del pago de los servicios de agua y de desagüe cloacal cuando carezcan de las conexiones respectivas.

Art. 42. — Los importes de las boletas por servicios sanitarios y demás cuentas que emita la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, cuyo pago no se efectúe en la época establecida al efecto, serán gravados con un recargo del 3 % por cada mes de atraso, hasta un máximo del 15 %, luego de lo cual serán pasadas a cobro por vía de apremio con dicho recargo del 15 % sobre su importe. Los valores correspondientes al servicio de agua para construcción, en lugar del recargo progresivo anterior sufrirán un recargo fijo del 25 % sobre su importe.

Las sumas recaudadas en concepto de recargo tendrán el carácter de compensatorias de los mayores gastos originados por la falta de percepción en oportunidad del importe de los servicios.

Los recargos establecidos en el presente artículo no se aplicarán a las cuentas correspondientes a inmuebles de propiedad de la Nación, de las provincias o de las municipalidades.

Art. 43. — Los inmuebles en los cuales la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación hubiere construido obras conforme se establece en el artículo 51 por cuenta de los propietarios, y los que adeuden servicios, multas y cualquier otra suma de acuerdo con las disposiciones de esta ley, quedarán afectados al pago de la deuda hasta su cancelación. El crédito correspondiente a las obras mencionadas tendrá el privilegio establecido en el artículo 3931 del Código Civil; el correspondiente a servicios y sus recargos tendrá el establecido en los artículos 3879, inciso 2º y 3880, inciso 5º, del mismo código. Ambos privarán sobre el crédito hipotecario posterior a las construcciones o a la prestación de los servicios, respectivamente.

Art. 44. — Antes de escriturarse una transferencia de dominio o constitución de derechos reales, o de ordenarse la inscripción de una sentencia o auto judicial que declare o reconozca una transmisión de derechos sobre inmuebles, se requerirá de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación un certificado en el que conste la deuda que por cualquier concepto reconozca el inmueble de que se trate. Dicho certificado tendrá validez de quince días contados desde la fecha de su expedición.

Los escribanos públicos deberán incorporar dicho certificado al protocolo en caso de escrituración, así como la posterior constancia de pago, si éste resultare obligatorio según lo que se establece a continuación.

Art. 45. — El pago de los servicios, recargos y multas, como así también el de las cuotas vencidas en el caso de construcción de obras domiciliarias, se hará indefectiblemente y en su totalidad en toda clase

de escrituras, dentro de los diez días subsiguientes a su otorgamiento.

Para las cuotas no vencidas de la deuda por construcciones realizadas de acuerdo al artículo 51, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación podrá, previa solicitud de los interesados, autorizar que las facilidades de pago concedidas se mantengan, sea en favor del adquirente en caso de transferencia de dominio, sea del mismo propietario en caso de constitución de derechos reales.

Art. 46. — El Registro de la Propiedad de la Capital Federal y territorios nacionales, y los de las provincias, no inscribirán títulos de dominio o de constitución de derechos reales, sin la constancia, en los testimonios de las respectivas escrituras, de haberse abonado la deuda certificada por la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, o de haberse aceptado la substitución del deudor o el mantenimiento de las facilidades si se trata de deuda no vencida correspondiente a obras construidas conforme al artículo 51. El mismo requisito se exigirá en los oficios que ordenen la inscripción de declaratorias de herederos, testamentos, autos o sentencias que reconozcan, declaren o transfieran tales derechos.

Art. 47. — En las ciudades y pueblos de provincias y territorios nacionales será juez competente para entender en las demandas que se inicien por cobros de las sumas que se adeuden de conformidad con la presente ley, el juez federal de sección o el juez letrado de territorios que corresponda.

La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación o el apoderado que ésta designe, intervendrá en dichos juicios como representante del fisco.

Art. 48. — El cobro de las cuentas se hará por la vía de apremio que establece la ley nacional de procedimientos, sirviendo de suficiente título el certificado que expida la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación designando a los inmuebles deudores y expresando la deuda que resulte de sus libros.

En este juicio no se admitirán otras excepciones que las de pago, prescripción, falsedad extrínseca del título y falta de personería, debiendo probarse la primera con los correspondientes recibos de pago y la última con documentos que acrediten que el demandado posee por cuenta ajena.

No procederá en él la obligación de afianzar las results de juicios ordinarios.

Art. 49. — Las disposiciones de los artículos 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 48 dejarán de aplicarse en la ciudad de Buenos Aires, una vez que entren en vigencia las previsiones del decreto 33.405/44, ratificado por la ley 12.922, en cuanto resulten incompatibles con las mismas.

Art. 50. — Las instalaciones o inmuebles de propiedad o en posesión de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación estarán exentos de todo impuesto, tasa, contribución de servicios y de mejoras y de cualquier otro gravamen que hayan sancionado o sancionen la Nación, las provincias, sus municipalidades y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Régimen de construcción de obras domiciliarias con beneficio de su pago por cuotas mensuales

Art. 51. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación podrá construir obras domiciliarias de provisión de agua y desagüe cloacal a pedido y por cuenta de los propietarios, quienes las

abonarán en 60 cuotas mensuales e iguales incluyendo intereses del 5 % anual capitalizado semestralmente.

Art. 52. — Por los fondos suministrados o que se suministren en adelante a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación para la construcción de obras domiciliarias a plazos, no se computará la cuota de reintegro. Dichos fondos serán devueltos a la tesorería nacional a medida que resulten innecesarios. En concepto de intereses, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación liquidará al gobierno nacional las mismas sumas que perciba de los propietarios deudores.

Régimen de rescate de las obras

Art. 53. — Una vez reintegrado el costo de las obras construidas en localidades del interior, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación hará entrega de las mismas a las autoridades locales respectivas, a su requerimiento. En caso de no mediar tal requerimiento, la explotación de los servicios seguirá a cargo de la citada repartición nacional, en las condiciones establecidas en la presente ley.

A los fines del presente artículo, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación llevará cuenta separada por cada ciudad o pueblo en que administre obras de salubridad; acreditará en ella los productos de la explotación y las amortizaciones extraordinarias que efectúen las autoridades locales y debitará los gastos industriales, intereses y cuotas de reintegro. Se entenderá reintegrado el costo de las obras construidas cuando los superávit anuales de esa cuenta alcancen a cubrir la totalidad de los capitales invertidos y las sumas empleadas para atender déficit de explotación que se hubieran producido.

La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación enviará, a pedido de parte, a cada provincia y municipalidad interesada, el balance correspondiente al estado de la cuenta expresada.

Art. 54. — No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, no serán rescatables los distritos que tengan obras comunes con las de la ciudad de Buenos Aires.

Art. 55. — Los distritos o explotaciones que, correspondiendo a distintas ciudades o pueblos, constituyan, por sus características, un solo sistema, únicamente podrán ser rescatados una vez reintegrado el costo del conjunto de las obras que formen ese sistema. Si las ciudades o pueblos integrantes del sistema estuvieran situados en el territorio de dos o más provincias, el Poder Ejecutivo, por intermedio de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, convendrá previamente con las autoridades respectivas los detalles atinentes al traspaso de las obras.

Régimen de construcción de obras de carácter reducido

Art. 56. — En las localidades en las cuales por su escasa población o por falta de capacidad contributiva o por otras razones económicas, resulte inconveniente la instalación del servicio domiciliario de provisión de agua potable, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación establecerá un servicio provisional, a base de surtidores públicos, ubicados en el número y forma suficientes, para la provisión gratuita de agua a los habitantes de la población y podrá destinar el excedente de líquido que se produzca para el servicio de abrevaderos públicos de hacienda.

En casos muy especiales, de verdadera excepción, fundados en razones de orden sanitario o económico, y cuando el caudal de agua lo permita, la administración general de Obras Sanitarias de la Nación podrá conceder conexiones para el servicio domiciliario de determinados establecimientos, cobrando por el mismo la retribución que fije la tarifa que establezca al efecto el Poder Ejecutivo.

Art. 57. — Si realizadas perforaciones el agua que se obtenga no resulta apta para el consumo humano, pero sí para otros usos domésticos o para abreviar hacienda, las instalaciones serán entregadas a la dirección general de Agua y Energía Eléctrica o a las autoridades locales para su ulterior atención.

Cláusulas especiales

Art. 58. — Para determinar el orden de ejecución de los estudios y obras en las localidades del interior del país la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación tendrá en cuenta el número de habitantes y sus condiciones de salubridad, a cuyo efecto atenderá las sugerencias que formule al respecto la Secretaría de Salud Pública.

Art. 59. — Cuando por razones de salubridad fuere necesario el abastecimiento de agua especialmente potable a núcleos de población situados dentro de las zonas de regadío servidas por obras de la Dirección General de Agua y Energía Eléctrica, la ejecución de las respectivas instalaciones y su explotación corresponderá a la administración general de Obras Sanitarias de la Nación.

Art. 60. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación podrá convenir con otras reparticiones del Estado, de las provincias o de las municipalidades, ad referendum del Poder Ejecutivo nacional, la instalación de obras y prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable y de desagüe cloacal en determinadas zonas o poblaciones, para satisfacer principalmente necesidades derivadas de explotaciones industriales, ferroviarias, etcétera; quedando a cargo de las reparticiones beneficiadas la financiación de la construcción, mantenimiento y funcionamiento de las obras, total o parcialmente, conforme sea la extensión y carácter de los servicios.

Art. 61. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación estará exenta de todo derecho de aduana, básico o adicional, por la importación de útiles, maquinarias, medios de transporte y cualquier otro material que se destine a la construcción por administración o por contrato o a la explotación de sus obras y servicios.

Art. 62. — Las multas incurridas por falta de cumplimiento, total o parcial, de los contratos celebrados con la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, así como los depósitos dados en garantía cuya pérdida se produzca por las mismas causas, se incorporarán a su renta.

Art. 63. — Declárase de utilidad pública el suelo o el subsuelo de los terrenos de propiedad privada y las fuentes de provisión de agua que sean necesarios para la ejecución de las obras que se construyan o amplíen en virtud de esta ley en todo el territorio de la Nación y queda autorizada la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación para proceder a su expropiación, de acuerdo con la ley de la materia.

Art. 64. — Las provincias y municipalidades entregarán a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación libre de todo cargo o gravamen, los terrenos y fuentes de provisión de agua que les pertenezcan y sean necesarios y constituirán las servidumbres que se requieran para la construcción, ampliación y explotación de las obras.

Art. 65. — Autorízase al Poder Ejecutivo a transferir a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, a título gratuito, los terrenos fiscales que sean necesarios para la ejecución de las obras previstas en esta ley, y concédese igual autorización para transferir con el mismo destino los terrenos municipales de la Capital Federal.

Art. 66. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, a solicitud de las autoridades locales y con autorización del Poder Ejecutivo, podrá tomar a su cargo, a medida que cuente con los recursos necesarios, las obras o instalaciones de provisión de agua y desagüe cloacal de propiedad provincial o municipal o de empresas privadas que actúen en virtud de concesiones, que sirvan a las ciudades y pueblos que se acojan al régimen de la presente ley.

En caso de que las obras o instalaciones fueran de propiedad provincial o municipal, deberán ser entregadas por sus autoridades sin cargo y su importe se acreditará en la cuenta patrimonial del distrito a formarse para la explotación de las mismas.

Si las obras o instalaciones fueran de pertenencia de empresas privadas, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación abonará exclusivamente por las mismas su valor físico de utilización. Entiéndese por valor físico de utilización el valor físico de origen de las instalaciones y maquinarias disminuido por la depreciación de uso, no contándose aquellas instalaciones y maquinarias que no sean utilizables para los nuevos servicios a prestar por la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación. La determinación de esos valores será efectuada por la citada repartición y sometida a la aprobación del Poder Ejecutivo nacional.

Las provincias y municipalidades deberán tomar a su exclusivo cargo el pago de toda suma que deba invertirse para la compra, rescate o expropiación de esas obras e instalaciones de propiedad privada, en cuanto exceda al valor físico de utilización.

Art. 67. — Serán conservadas en poder de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, las usinas construídas y en explotación por la misma para el exclusivo suministro de energía eléctrica a sus propias instalaciones; y podrá construir nuevas usinas con iguales fines, cuando no existan en las localidades donde se disponga la realización de obras de saneamiento y la Dirección General de Agua y Energía Eléctrica haya expresado su determinación de no instalarlas.

Art. 68. — En los territorios nacionales, toda fundación de nuevos centros de población quedará supe-ditada al dictamen favorable de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación sobre la posibilidad de un adecuado aprovisionamiento de agua potable.

Art. 69. — Quedan derogadas todas las disposiciones legales o reglamentarias en cuanto se opongan a la presente ley; y, en particular, el artículo 172 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto, edición 1943.

Disposición de emergencia

Art. 70. — Decláranse hechos con facultades suficientes, en cuanto no hayan excedido las que la ley 8.889 otorgaba al extinguido directorio, los actos realizados por Obras Sanitarias de la Nación o por la Administración Nacional del Agua con respecto a los servicios y obras que competen específicamente a dicha repartición y que hayan sido dispuestos por

autoridades y funcionarios que en virtud de decretos del Poder Ejecutivo nacional substituyeron al directorio, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran haber incurrido esas autoridades y funcionarios por inobservancia de otras leyes o reglamentos.

Art. 71. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Juan Pistarini.

COMPARATIVO**Proyecto de ley del Poder Ejecutivo**

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Institución

Artículo 1º — La actual Administración General de Obras Sanitarias de la Nación constituirá una institución dependiente del Ministerio de Obras Públicas, que se regirá por las disposiciones de la presente ley, conservando su actual denominación.

Objeto de la institución

Art. 2º — Corresponde a la misma el estudio, proyecto, construcción, renovación, ampliación y explotación de las obras de provisión de agua y saneamiento urbano en la Capital Federal y ciudades y pueblos de la República, y la exploración, alumbramiento y utilización de las aguas subterráneas, cuya ejecución sea dispuesta por el Poder Ejecutivo en las condiciones que más adelante se establecen.

El Poder Ejecutivo podrá autorizar a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación a establecer industrias para extraer o producir la materia prima o los materiales elaborados necesarios para sus servicios, o bien a participar en empresas de capital mixto que persiguen el mismo objeto.

Las obras ya construídas que se incorporen al régimen de la presente ley y las comprendidas en las previsiones del artículo 13, serán explotadas por la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación.

Organización, atribuciones y deberes y autoridades

Art. 3º — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación funcionará con la autarquía que le atribuye la presente ley, pero el Poder Ejecutivo ejercerá sobre ella la superintendencia necesaria para el debido contralor de su funcionamiento y podrá intervenirla cuando las exigencias del buen servicio lo hicieran indispensable.

Análisis del proyecto de ley

Por el presente artículo y conforme a la ley anterior 8.889, se da nombre a la repartición.

LEY 8.889

Artículo 2º — Se llamará Obras Sanitarias de la Nación y funcionará con la autonomía que le atribuye esta ley, pero el Poder Ejecutivo ejercerá sobre ella la superintendencia necesaria para el debido contralor de su funcionamiento y podrá intervenirla en cualquier momento cuando las exigencias del buen servicio lo hicieran indispensable.

Artículo 2º — Por este artículo se definen las actividades a que deberá circunscribirse la repartición, cuyo cometido anteriormente le asignaban numerosas leyes especiales.

Para dar una sanción legal a una situación existente de hecho, se ha agregado la facultad de establecer industrias vinculadas a sus servicios. Es sabido que dicha repartición posee diversas fábricas y talleres en la Capital Federal y poblaciones suburbanas y, dada la índole de los servicios que presta, deberá estar facultada para cuando le resulte conveniente y necesario producir, por sí, los elementos que requiere el proceso de elaboración y distribución de agua potable o la evacuación de líquidos residuales.

Si bien por el presente artículo, para la agilización administrativa de la repartición se le da autarquía, la superintendencia sobre ella del Poder Ejecutivo y de la que corresponda a la Contaduría General de la Nación, que se establece por el mismo artículo, queda debidamente controlado su funcionamiento a igual a lo que estableciera el artículo 2º de la ley 8.889, transcrito más arriba. (Ver aclaración en artículo 1º.)

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

La superintendencia prevista en el párrafo precedente se ejercerá sin perjuicio de las facultades que correspondan a la Contaduría General de la Nación por la ley de contabilidad y demás vigentes, salvo en cuanto hayan quedado modificadas por la presente.

Art. 4º — Para el cumplimiento de los fines consignados en el artículo 2º, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación tendrá las siguientes facultades:

- a) Administrar los bienes e instalaciones pertenecientes a la institución, en las condiciones establecidas por el Código Civil y con las responsabilidades que él determina, pudiendo representarla en juicio, sea como demandante o demandada y transigir o celebrar arreglos judiciales o extrajudiciales, y adoptar las medidas que estime necesarias para la debida prestación de los servicios a su cargo, con arreglo a las disposiciones de la presente ley y a las reglamentaciones en vigor o que en lo sucesivo apruebe el Poder Ejecutivo;
- b) Celebrar convenios de compraventa o locación de bienes muebles o inmuebles, así como los contratos para la adquisición de materiales o ejecución de obras, con licitación pública o sin ella, de acuerdo con las leyes de contabilidad y de obras públicas;
- c) Proyectar anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos de la institución, así como el plan de trabajos públicos y los correspondientes reajustes de todos ellos, para su elevación al Poder Ejecutivo nacional;
- d) Proponer al Poder Ejecutivo la fijación de la tarifa para el cobro de los servicios que presta la institución;
- e) Promover ante las autoridades provinciales y municipales las tramitaciones tendientes al acogimiento de las ciudades y pueblos del interior del país, al régimen de la presente ley.

Art. 5º — Será dirigida por un Consejo de Administración, presidido por un funcionario con la denominación de administrador general, que será nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, e integrado por los directores generales técnicos de explotación comercial, de finanzas y contabilidad, de asuntos jurídicos y de personal y asistencia social.

Los directores generales técnicos y de explotación comercial reemplazarán, en este orden, al administrador general, en caso de vacancia o ausencia o imposibilidad temporaria del titular.

Art. 6º — Corresponde al Consejo de Administración la resolución de los siguientes asuntos:

- a) Aprobación del presupuesto general de gastos y cálculo de recurso y de la memoria anual;

Análisis del proyecto de ley

Por este artículo se determinan las facultades a que deberá encuadrar sus actividades la repartición, las que con algunas variantes se reproducen las mismas establecidas en algunos incisos del artículo 4º de la ley 8.889:

- a) Administrar los bienes e instalaciones pertenecientes a la institución en las condiciones establecidas por el Código Civil y con las responsabilidades que él determina, pudiendo representarla en juicio, sea como demandante o demandada y transigir o celebrar arreglos judiciales o extrajudiciales.
- b) Celebrar convenios de compraventa o colocación de bienes muebles o inmuebles, así como los contratos para adquisiciones de materiales o ejecución de obras con licitación pública o sin ella, de acuerdo con la ley de contabilidad.
- d) Preparar anualmente su presupuesto general de gastos y cálculo de recursos, fijando el derecho que habrá de cobrarse por la provisión de agua y el uso de las cloacas.
- e) Nombrar el personal técnico y administrativo y removerlo en los casos de inconducta, mal desempeño o necesidades del servicio.
- f) Convenir con los gobiernos de provincias, ad referendum del Congreso de la Nación, el estudio, construcción y administración de obras destinadas a la provisión de agua potable para uso doméstico en las ciudades, pueblos y colonias de la Nación.

Al determinarse en este artículo las autoridades de la repartición, se suprime el directorio establecido por el artículo 3º de la ley 8.889 y se crea un consejo de administración presidido por un administrador general e integrado por los jefes de las principales dependencias. En esta forma el cuerpo directivo será eminentemente técnico y más adecuado para la conducción de las dependencias técnicas.

Con el objeto de evitar dudas, que en la aplicación de la ley 8.889 se presentaron, y, a fin de facilitar la tarea administrativa, se determinan en este artículo las facultades de la repartición con la intervención del consejo de administración.

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Análisis del proyecto de ley

- b) Aprobación de proyectos y presupuestos de obras y determinación de la oportunidad y forma, por administración o por contrato, de ejecución de las mismas;
- c) Aprobación de pliegos de condiciones y especificaciones para licitar la construcción de obras y ejecución de trabajos o servicios, y para la compraventa de materiales, artefactos, maquinarias, etcétera, y su adjudicación, o la adjudicación o compra directa de los mismos, y todo lo concerniente al cumplimiento de los contratos emergentes; en los casos en que su importe exceda de veinte mil pesos moneda nacional (\$ 20.000);
- d) Organización y distribución de las dependencias de la repartición;
- e) Formulación de los reglamentos internos y de los que deban someterse a la aprobación del Poder Ejecutivo;
- f) Determinación de las tarifas para el cobro de los servicios prestados;
- g) Compraventa y locación de inmuebles, expropiaciones y servidumbres;
- h) Adquisición de obras e instalaciones de provisión de agua y desagüe cloacal;
- i) Confección del plan anual de trabajos públicos;
- j) Celebración de arreglos judiciales o extrajudiciales y transacciones;
- k) Consideración de todo otro asunto que someta a su consideración el administrador general.

Las resoluciones del Consejo de Administración serán adoptadas por mayoría de votos presentes, teniendo el administrador general doble voto en caso de empate. Si el administrador general estuviera en desacuerdo con lo resuelto por la mayoría del consejo, el asunto será llevado al Poder Ejecutivo, el que resolverá en definitiva.

Art. 7º— El administrador general tiene a su cargo la parte ejecutiva de la repartición, ejerce su representación legal y administrativa y le corresponde resolver los asuntos no reservados para el Consejo de Administración.

Art. 8º— El administrador general podrá delegar en las dependencias principales de la administración la adopción de resoluciones en cuanto se trate de la simple aplicación de normas establecidas en leyes o reglamentos y no comprometan el patrimonio de la repartición.

Aplicabilidad de la presente ley y régimen de convención

Art. 9º— Las disposiciones de la presente ley serán aplicables desde su promulgación en la Capital Federal y en los territorios nacionales, sin necesidad de acogimiento expreso por parte de las autoridades comunales respectiva.

Por este artículo se establecen las atribuciones del administrador general, que son aquellas no reservadas al consejo de administración.

Como se comprende por el presente artículo, la magnitud de la repartición hace necesaria la distribución de las tareas directivas y para ello se delega las funciones del administrador general en las dependencias principales y dentro de las normas de las disposiciones reglamentarias.

Por las disposiciones de este artículo ya no será necesario el acogimiento expreso de las autoridades comunales respectivas de la Capital Federal y territorios nacionales, a los beneficios de esta ley, por ser aplicable estas desde su promulgación.

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Art. 10. — La incorporación de nuevas ciudades y pueblos de provincias al régimen establecido en la presente ley, se producirá mediante el siguiente procedimiento: las Legislaturas sancionarán leyes que declaren con carácter general el acogimiento de la provincia y acuerden a las municipalidades respectivas, no comprendidas en la ley 4.158, la facultad de acogerse en cada caso particular; una vez producida la expresión de voluntad de la municipalidad o bien de la autoridad que haga sus veces, en caso de que no existiera organismo comunal con facultades suficientes, el poder ejecutivo provincial declarará por decreto el acogimiento, con lo que quedará perfeccionado el vínculo contractual sobre la base de las disposiciones de la presente ley y reglamentación complementaria.

Art. 11. — Las obras construídas en virtud de la ley 4.158 quedarán incorporadas a la presente desde la sanción de la ley general provincial prevista en el artículo 10, y en cuanto a las ejecutadas, en construcción o proyectadas en las provincias de acuerdo con las leyes 10.998 y 12.140, desde que las municipalidades, o la autoridad que haga sus veces, expresen su voluntad de ser comprendidas en el régimen de esta ley y el poder ejecutivo provincial así lo declare por decreto.

Art. 12. — Las localidades de provincias acogidas oportunamente al régimen del decreto 33.425/44 y las obras ejecutadas en las mismas, quedarán comprendidas en lo establecido por la presente ley, en lo que respecta a las obras de saneamiento, una vez que las Legislaturas locales y las municipalidades respectivas ratifiquen aquellos acogimientos. Para las ciudades comprendidas en la ley 4.158 será suficiente la ratificación de las Legislaturas.

Art. 13. — Mientras las obras a que se refieren los artículos 11 y 12 no se incorporen al régimen de la presente ley, continuarán en vigor, a su respecto, las disposiciones en virtud de las cuales ellas fueron autorizadas.

Análisis del proyecto de ley

En este artículo se reglamenta el procedimiento a seguir en lo sucesivo por las nuevas ciudades y pueblos de provincias, a fin de incorporarse al régimen de esta ley cuando requieran las actividades de Obras Sanitarias de la Nación, para lo cual quedan suprimidos los convenios para su acogimiento.

Artículos 11, 12 y 13. — Estos artículos se correlacionan y se refieren a la incorporación de obras ya construídas en las localidades de provincias que tienen obras en explotación; la incorporación de éstas al régimen de la presente ley, deberá realizarse atendiendo a las modalidades que primitivamente las autorizaron, las que conservan su vigor hasta que la incorporación se produzca.

LEY 4.158

Artículo 1º — Autorízase al Poder Ejecutivo para proceder a la construcción de las siguientes obras de salubridad:

- a) Provisión de aguas corrientes en las capitales de provincias acogidas a la ley 3.967.
- b) Provisión de aguas corrientes a la ciudad y puertos comercial y militar de Bahía Blanca y ciudad de Barracas al Sur.
- c) Drenaje y cloacas en la ciudad de Salta.
- d) La extensión de las cañerías de aguas corrientes y de las cloacas externas en la capital de la República, dentro de los treinta distritos del proyecto Bateman, así como los terrenos del puerto.
- e) La extensión de las cañerías de aguas corrientes en la misma capital fuera del radio indicado en el inciso anterior.

Artículo 6º — Las obras que se construyan en virtud de la presente ley quedan afectadas como garantía de pago de los bonos que se emitan.

Artículo 8º — Para la ejecución de la presente ley el Poder Ejecutivo celebrará previamente los convenios respectivos con los gobiernos de las provincias que se acogieren a ella.

LEY 12.140

Artículo 13. — Autorízase al Poder Ejecutivo de la Nación para convenir con los gobiernos provinciales o comunales la adquisición, ad referendum del Congreso, de las obras con que en algunos puntos del país se atienden actualmente los servicios de provisión de agua potable o desagües cloacales y, asimismo, para adquirir las instalaciones y bienes que estén afectados a tales servicios.

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Análisis del proyecto de ley

DECRETO LEY 33.425/44

Artículo 4º — Corresponde a la Administración Nacional del Agua la construcción y explotación de las obras para la provisión de agua potable y riego, desagüe cloacal y pluvial, avenamiento, defensa, saneamiento, la administración del agua pública y en general todo lo referente al aprovechamiento, sistematización y policía de las aguas superficiales o subterráneas.

En consecuencia, quedan a su cargo todas las obras, servicios y funciones que actualmente atienden la Administración de Obras Sanitarias y la Dirección General de Irrigación en todo el territorio del país.

Artículo 5º — A los efectos establecidos en el artículo 4º, cuando las obras deban ser realizadas en territorio perteneciente a alguna provincia, será necesaria la expresión de la voluntad de ésta de acogerse al régimen de la Administración Nacional del Agua.

Cuando las obras deban realizarse dentro de la jurisdicción municipal, deberá también la municipalidad manifestar su acogimiento.

Para que se tenga por acogidas las provincias o municipios a los beneficios del presente decreto, se requerirá la declaración del Poder Ejecutivo nacional que así lo acuerde en definitiva.

El Poder Ejecutivo declarará también acogidos al presente decreto a las ciudades o pueblos situados en los territorios nacionales, previa manifestación por parte de sus autoridades de su voluntad de incorporarse al régimen del mismo.

Este artículo se refiere a la retractación del acogimiento a la presente ley. En principio, el acogimiento de una localidad al régimen de esta ley establece para la Nación la obligación de ejecutar las obras determinadas en el mismo, pero, si esa finalidad no se cumpliera en tiempo prudencial, correspondería a las municipalidades se les permita recobrar sus facultades de construir dichas obras, para lo cual se las libera del compromiso contraído.

Por este artículo se determina que la realización de los estudios y proyectos, sólo podrá llevarse a cabo una vez perfeccionado el vínculo contractual con la municipalidad respectiva.

Este artículo tiende a dejar establecido, en forma clara y precisa, que para las modificaciones en las obras no serán necesarias nuevas tramitaciones para que aquéllas puedan ser ampliadas o mejoradas.

Por este artículo se asegura a la Nación, por medio de Obras Sanitarias de la Nación, un régimen de exclusividad en la prestación de los servicios y atempera las exigencias de la exclusividad frente a la

Art. 14. — Transcurrido el término de tres años, a contar de la fecha del acto que declare su acogimiento a la presente ley, sin que se hubiera dado comienzo a la ejecución de las obras, la municipalidad respectiva podrá desistir del mismo, a cuyo efecto dictará la ordenanza correspondiente y la comunicará a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación.

Si el proyecto de las obras estuviera ya confeccionado, la municipalidad deberá reintegrar su costo a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación en caso de que lo utilice para la construcción de las obras.

Art. 15. — Cumplida la tramitación prescripta en los artículos 10, 11 ó 12, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación efectuará los estudios y formulará el proyecto respectivo, el que será aprobado en la forma que establece el artículo 6º.

Art. 16. — Mientras las obras construidas no hayan sido entregadas a las autoridades provinciales o municipales en virtud de lo que establecen los artículos 53 y 55, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación ejecutará las obras de ampliación, renovación y mejoramiento que el buen servicio haga necesarias.

Art. 17. — Desde la fecha del acogimiento de las ciudades y pueblos al régimen de la presente ley, no podrán otorgarse en los mismos concesiones para la prestación de los servicios de provisión de agua y

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

desagüe cloacal que ella contempla, ni prestarse por instituciones provinciales o municipales; pero en las localidades donde ya exista una concesión particular podrá convenirse la subsistencia de la misma contemporáneamente con la prestación que la Nación toma a su cargo, siempre que el radio de acción se delimite en forma de que no se produzcan superposiciones.

Régimen financiero

Art. 18. — Los ejercicios financieros, las rendiciones de cuentas y la inspección de la contabilidad de la institución se sujetarán a las disposiciones de la ley de contabilidad, con la intervención pertinente de la Contaduría General de la Nación. Dentro del primer semestre de cada año, el administrador general presentará al Poder Ejecutivo la memoria correspondiente al ejercicio anterior.

Art. 19. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación tendrá siempre sus depósitos en el Banco Central de la República o en el establecimiento que éste determine, en cuenta corriente o a plazo fijo, y queda autorizada a adquirir títulos de la deuda pública de la Nación, con intervención del Ministerio de Hacienda, siempre que la operación resulte conveniente para evitar pérdidas de intereses.

Art. 20. — No podrá apartarse de las autorizaciones de gastos contenidas en su presupuesto general aprobado, ni alterar los sueldos en forma alguna, directa o indirectamente, sin autorización del Poder Ejecutivo en cada caso.

Art. 21. — Para los gastos que demanden los estudios, proyectos, construcción, renovación y ampliación de las obras, créase un crédito global de doscientos millones de pesos moneda nacional (\$ 200.000.000) por año, que se considerará incluido en las leyes 12.576 y 12.815 e incorporado al total de la suma que

Análisis del proyecto de ley

circunstancia de que ya exista la prestación de servicios en una zona claramente delimitada, en forma tal que no puedan producirse superposiciones. La prohibición establecida es perfectamente explicable. Si la municipalidad se ha acogido al régimen de esta ley, es para que la Nación construya las obras y resulta ilógico que luego de adoptada esa decisión, resuelva encarar por sí misma la ejecución de los trabajos; pero si la Nación no se encuentra en grado de realizar las obras transcurrido el plazo de tres años, podrá entonces la municipalidad recobrar la facultad de llevarlas a cabo, previo desistimiento, acogiéndose al artículo 14.

El presente artículo se ajusta a la ley de contabilidad 12.961, modificándose así el artículo 8º de la ley 8.889.

LEY 8.889

Artículo 8º — Los ejercicios financieros de las Obras Sanitarias de la Nación se cerrarán el 31 de diciembre de cada año, debiendo el directorio presentar al Poder Ejecutivo dentro del primer trimestre siguiente, la memoria correspondiente al ejercicio terminado, junto con la rendición completa de las cuentas para su examen por la contaduría general, la que aprobará el balance antes de ser publicado. La Contaduría General podrá inspeccionar en cualquier momento la contabilidad de la institución, haciendo al Poder Ejecutivo las observaciones que considere oportunas respecto de su marcha y dirección.

Este artículo, con alguna modificación, se encuadra dentro del alcance del artículo 9º de la ley 8.889.

LEY 8.889

Artículo 9º — El directorio deberá tener siempre sus depósitos en el Banco de la Nación, en cuenta corriente o a plazo fijo, y queda autorizado a adquirir títulos de la deuda pública de la Nación, siempre que la operación resulte conveniente para evitar inútiles pérdidas de intereses.

Este artículo tiene el mismo alcance del artículo 10 de la ley 8.889.

LEY 8.889

Artículo 10. — El directorio no podrá apartarse de las autorizaciones de gastos contenidas en el presupuesto general aprobado, ni alterar los sueldos en forma alguna, directa o indirectamente, sin autorización del Poder Ejecutivo en cada caso.

Con el crédito global anual, que trata el presente artículo, viene a resolverse el problema que ha planteado frecuentemente la insuficiencia del crédito otorgado por las leyes de la materia, lo cual ha obligado a paralizar los trabajos en ejecución con los consiguientes inconvenientes.

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

anualmente autorice a invertir en la ejecución de obras públicas el Honorable Congreso de la Nación para ser atendida con el producido de la emisión de títulos. No se operará el arrastre de dicho crédito, debiendo cancelarse los excedentes anuales que se produzcan.

El Poder Ejecutivo, por conducto de los departamentos de Obras Públicas y de Hacienda, fijará en un plan anual, que aprobará en particular para la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, la suma a invertir en el ejercicio, dentro la máxima establecida en el párrafo anterior. Una vez aprobado, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación quedará facultada para realizar y adjudicar las licitaciones para la construcción de obras y compra de los materiales destinados a las mismas, con arreglo a las disposiciones de las leyes de contabilidad y de obras públicas. La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación podrá contratar la ejecución de obras y compra de materiales por sumas que excedan a las asignadas para el ejercicio, cuando se trate de trabajos cuya realización requiera más de un año, sin que excedan los créditos correspondientes a esos años futuros, pero sólo podrá invertir anualmente la cantidad fijada en el plan de trabajos.

Las sumas que con tales objetos se entreguen a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación se acreditarán en una cuenta especial. El servicio financiero de estas sumas se efectuará en la forma que más adelante se dispone.

Art. 22. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación atenderá los gastos de explotación y servicios financieros de las obras construidas en la Capital Federal y en las ciudades y pueblos de las provincias y territorios conforme a las leyes 4.158, 10.998 y 12.140 y de las de saneamiento ejecutadas con arreglo al decreto 33.425/944, así como de las que se construyan en virtud de las disposiciones de la presente ley, con los siguientes recursos:

- a) La recaudación, por todo concepto, de las mencionadas explotaciones;
- b) El aporte de rentas generales que fije anualmente el presupuesto general de la Nación;
- c) Las donaciones y legados.

Análisis del proyecto de ley

Se entiende aquí que la creación de créditos particulares para cada obra se justifica con otra clase de trabajos, sobre los cuales el Honorable Congreso debe apreciar su oportunidad y conveniencia, pero, tratándose de servicios sanitarios, todos por definición son necesarios y urgentes, por lo que se cree innecesario a ese respecto hacer una consideración singular para cada obra.

La segunda parte de este artículo, sobre la aprobación del plan anual para Obras Sanitarias, tiene como única variación sobre el régimen en vigor la independización de los otros trabajos públicos.

La demora que en algunos casos ha sufrido el plan general de trabajos públicos anual, nunca fué originada por la distribución de los fondos correspondientes a obras de saneamiento, pero dicha demora ha obstaculizado la ejecución de éstas, como es lógico. A evitar en lo sucesivo tal inconveniente tiende esta disposición.

La aprobación del plan anual, para construcciones de Obras Sanitarias, es la autorización legal para que ejecute las obras, ya sea por administración o por contrato y asimismo la compra de materiales.

Se consigna en forma expresa esta disposición legal, con el objeto de evitar dudas, porque en algunos casos ha sido discutida esa disposición legal.

Sería conveniente que para precisar el alcance de este artículo se modificara la redacción del mismo, en la siguiente forma:

En el párrafo segundo, en vez de:

Realizar y adjudicar las licitaciones para la construcción de obras y compra de los materiales...

Decir:

Contratar la construcción de las obras y adquirir los materiales y elementos destinados...

Sería la misma redacción que para el caso similar de aprobación del presupuesto de explotación que se consigna en el artículo 26.

El presente artículo se refiere a los recursos de la repartición, lo que aparte de los ingresos ordinarios se prevé un aporte de rentas generales que integrará los recursos anuales, sin perjuicio que se cubran con fondos del mismo origen los déficit del ejercicio.

Es sabido que desde la sanción de la ley 12.140, modificación de la ley 10.998 de Obras Sanitarias de la Nación, las obras de provisión de agua y desagüe han dejado de cubrir totalmente sus gastos, pues las tarifas, ni aun con el aumento dispuesto, permiten atender en muchas poblaciones del interior, los gastos de explotación y servicios financieros.

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Si la suma de esos recursos no alcanzara a cubrir los egresos del ejercicio por concepto de gastos de explotación, el déficit que se produzca será atendido de rentas generales, con carácter de contribución no reintegrable. También se hará remisión a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación de los servicios financieros que haya dejado de cumplir en el año por falta de fondos.

En el presupuesto general de gastos de la Nación se incluirán las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones precedentes.

Art. 23. — La suma entregada a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación para la construcción de obras de salubridad, fijada en la cantidad de cuatrocientos cuarenta y ocho millones cincuenta y ocho mil doscientos quince pesos con ochenta y nueve centavos moneda nacional (\$ 448.058.215,89), al 31 de diciembre de 1939 por decreto 75.517, de fecha 26 de octubre de 1940 y las que con el mismo fin ha recibido con posterioridad y reciba en el futuro, devengarán un interés igual al menor nominal de los títulos de la deuda pública nacional y su importe será reintegrado por aquella institución mediante la entrega de una cuota del 2 % anual, no acumulativa. Los intereses de esas sumas comenzarán a correr el 1º de enero del año siguiente al de su entrega.

Por los capitales entregados con destino a estudios y construcción de obras, el reintegro comenzará a computarse una vez puestas en explotación las mismas obras; hasta ese momento, los referidos capitales sólo devengarán intereses.

Declárase cancelada la deuda de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación con el gobierno nacional por servicios de amortización e intereses no pagados y las sumas recibidas para costear los déficit de explotación. La presente cancelación de deuda se aplicará con relación a la cuenta global que se crea por el artículo 21, pero no tendrá efecto respecto de las cuentas singulares a que se refiere el artículo 53.

Art. 24. — Si en el ejercicio de un año, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación alcanza a cubrir los gastos industriales, los intereses correspondientes y la cuenta de reintegro, el excedente será destinado en el año siguiente a la construcción de nuevas obras o a la renovación, ampliación y mejoramiento de las existentes, a cuyo efecto se incluirán las partidas respectivas en el plan correspondiente.

Régimen de explotación

Art. 25. — Si el 1º de enero de cada año no se hallare sancionado el presupuesto general de gastos y recursos de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, se considerará prorrogado el vigente para el año anterior.

Análisis del proyecto de ley

El nuevo concepto de la obra de saneamiento, como obra de carácter social, ha substituído al concepto anterior, que la consideraba retributiva; en consecuencia debe mantenerse la nueva orientación, porque son precisamente los núcleos urbanos de poblaciones modestas, las de menor capacidad contributiva, los que con mayor urgencia requieren esta clase de servicios, porque carentes de recursos, no pueden procurarse soluciones individuales.

El aporte de rentas generales no es sino la ayuda de toda la Nación para atender la salud de los pueblos menos favorecidos en su potencial económico.

Este artículo se refiere a los servicios de la deuda.

Por decreto 75.517 —26 de octubre de 1940— se aprobó el informe hecho por la comisión integrada por funcionarios del Ministerio de Hacienda y de Obras Sanitarias de la Nación, para determinar la deuda por todo concepto de esta última, desde que inició la explotación de los servicios a su cargo. Por este artículo se establece el interés que devengará esa deuda y la forma de reintegro en lo sucesivo para estudios y construcciones de obras y no deberá integrar los déficit de la explotación industrial y financiera, por las razones que se dan al comentar el artículo anterior.

Por el presente artículo se da destino al excedente del producido líquido de la explotación, que al suprimirse la contribución a rentas generales, es el concepto del artículo 7º de la ley 8.889.

LEY 8.889

Artículo 7º — El producido líquido de las obras sanitarias será destinado al servicio de las deudas a que estuvieren afectadas y el remanente a la prosecución o mejoras de las obras y a la creación de un fondo de reserva prudencial y a rentas generales en la parte establecida por la ley de presupuesto.

Por este artículo se autoriza la prórroga automática del presupuesto de la repartición, que teniendo el carácter de público la prestación de sus servicios, necesita se le asegure la efectividad de un presupuesto.

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo**Análisis del proyecto de ley**

Esta cláusula no es nueva, pues se la encuentra en otras leyes orgánicas de reparticiones centralizadas y su mantenimiento no obstará para el juego de las previsiones contenidas en el artículo 16, de la ley 12.961.

Si el Congreso aprueba el nuevo presupuesto, regirá éste; si tal cosa no ocurre, el Poder Ejecutivo podrá autorizar los créditos indispensables, en base al proyecto de ley enviado al Congreso; y si ninguna de estas previsiones se cumplen, se operará la prórroga automática del presupuesto del año anterior, hasta que se cuente con la aprobación legal del nuevo.

LEY 12.961

Artículo 16. — Si al iniciarse el año financiero no se hubiera aprobado el presupuesto a regir, el Poder Ejecutivo podrá autorizar provisionalmente, en base al proyecto que dentro del plazo del artículo anterior hubiera presentado al Congreso, los créditos indispensables para la continuidad de la marcha de la administración y sus ramas descentralizadas, por los conceptos generales comprendidos en el mismo. Si al sancionarse el presupuesto general existiesen gastos efectuados en virtud de lo dispuesto en este artículo, sin contar con el crédito adecuado, se incorporarán a los anexos respectivos las partidas necesarias, conforme al régimen de la presente ley.

La disposición establecida por este artículo parecería superabundante, dado que la aprobación de un presupuesto implica la autorización tácita para realizar los gastos autorizados en él, sin necesidad de nuevos trámites, pero se incluye por las mismas razones establecidas en el segundo párrafo del artículo 21.

El presente artículo tiende a unificar las disposiciones de explotación de todas las obras existentes y a construirse, sin necesidad de establecerlo en cada caso, como anteriormente se hacía mediante el régimen de convenios singulares. Este artículo es la reproducción del artículo 16, del decreto 33.425/44.

DECRETO 33.425

Art. 16. — En todos los distritos con obras en construcción o explotación incorporados al régimen del presente decreto, regirán los reglamentos y disposiciones que hayan dictado para los servicios sanitarios de la ciudad de Buenos Aires el Poder Ejecutivo de la Nación o la Administración de Obras Sanitarias de la Nación, así como también las disposiciones legales o reglamentarias referentes a los establecimientos industriales. Todas esas disposiciones legales o reglamentarias serán uniformes y las modificaciones que en el futuro introduzcan a las mismas el Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo nacional o el Consejo de Administración de la Administración Nacional del Agua, cada uno en la esfera de su competencia, tendrán carácter de obligatorias en todos los distritos.

Art. 26. — Producida la aprobación expresa de su presupuesto o la prórroga automática prevista en el artículo precedente, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación quedará facultada para realizar la adquisición de los materiales y elementos y celebrar las contrataciones que requiera la explotación de los servicios, con arreglo a las leyes de contabilidad y de obras públicas.

Art. 27. — En todos los distritos con obras en construcción o explotación regirán los reglamentos y disposiciones que hayan dictado para los servicios sanitarios de la ciudad de Buenos Aires el Poder Ejecutivo o la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, así como también las disposiciones legales o reglamentarias referentes a los establecimientos industriales. Las modificaciones que en el futuro introduzcan a las mismas el Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo nacional o la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, cada una en la esfera de su competencia, tendrán carácter de obligatorias en todos los distritos en cuanto sean de aplicación en ellos.

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Art. 28. — A requerimiento de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, las empresas de servicios públicos, instituciones o particulares que hagan uso u ocupen el suelo o subsuelo, removerán sus instalaciones cuando sea necesario para la construcción o explotación de las obras previstas en la presente ley. Los gastos que esos trabajos demanden serán abonados por la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, salvo que los concesionarios se hallen obligados a soportarlos porque así lo establezcan sus respectivos contratos de concesión. La remoción de las instalaciones de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación será costada por quienes la soliciten.

Análisis del proyecto de ley

Este artículo se ha incorporado con el objeto de dar solución a una cuestión que en la práctica se planteó entre empresas concesionarias de servicios públicos y Obras Sanitarias de la Nación, con motivo de la remoción de instalaciones de aquéllas para la ejecución de trabajos públicos. Por decreto de la provincia de Buenos Aires, de 7 de abril de 1874, se dispuso que las empresas de tranvías, autorizadas para ocupar con sus rieles la vía pública, deberán removerlos cada vez que la administración lo exigiera para ejecutar las obras de salubridad. En sus considerandos se recordaba el carácter precario de los permisos de ocupación del dominio público, el derecho del gobierno de revocar las concesiones de tranvías, finalmente que es también doctrina universalmente admitida que los concesionarios de bienes del dominio público no pueden pretender indemnización alguna de perjuicios en razón de las disposiciones que la administración juzgue a propósito adoptar por causas de interés público.

En una cuestión planteada por las empresas de gas, se resuelve con igual criterio conforme al decreto del Poder Ejecutivo de 12 de noviembre de 1883 y, por último, por decreto de fecha 17 de enero de 1900, el Poder Ejecutivo declara comprendidas en las disposiciones del anterior a todas las empresas que como las de luz eléctrica, de teléfonos, de transmisión de fuerza de tracción subterránea, etcétera, utilizan la vía pública o su subsuelo.

Sin embargo, las dos cámaras en lo Civil de la ciudad de Buenos Aires han declarado que los concesionarios no reconocen otros gravámenes que los expresamente establecidos en los contratos de concesión y sin desconocer el derecho de la administración de exigirles en todo momento la remoción de sus instalaciones, han establecido que ésta debe resarcirles los perjuicios que con tal motivo les ocasiona. («Jurisprudencia Argentina», tomo 59, página 220 y tomo 66, página 449.)

El artículo que se proyecta, acatando la decisión de la jurisprudencia, tiende a dejar debidamente aclarada la cuestión y sólo desconoce el derecho de indemnización cuando los contratos de concesión imponen a los concesionarios la obligación de tolerar a su costa la remoción de instalaciones por causa de trabajos públicos.

Art. 29. — La dotación de los servicios de agua y desagüe cloacal será obligatoria para todo inmueble habitable comprendido dentro del área donde se hayan instalado las cañerías de distribución de agua y las colectoras de cloacas. También deberá dotarse de esos servicios a los inmuebles que sin ser habitables por personas se utilicen como depósito de animales.

Por este artículo se establece la obligatoriedad de la instalación de servicios domiciliarios, que con anterioridad fué prevista por el artículo 2º de la ley 1.917 —Obras domiciliarias de salubridad de la Capital— y artículo 6º de las «Cláusulas generales de los convenios».

LEY 1.917

Artículo 2º — Declárase obligatorio para todo inmueble comprendido en dicha área, el establecimiento de cloacas y su uso, así como el servicio de agua para la finca habitada.

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo**Análisis del proyecto de ley***Cláusulas generales de los convenios*

Artículo 6º — La dotación de los servicios de agua y desagüe cloacal será obligatoria para todo inmueble habitable comprendido dentro del área donde se hayan instalado las cañerías de distribución de agua y las colectoras de cloacas. También deberá dotarse de ese servicio a aquellos inmuebles que sin ser habitables por personas, se utilicen como depósitos de animales.

Art. 30. — Las obras domiciliarias externas serán construídas por la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, y las obras internas por los propietarios. Las conexiones serán costeadas por la citada repartición, salvo las excepciones que establezca la reglamentación.

Por este artículo se establece que la construcción de las conexiones será sin cargo a los propietarios, aplicándose el artículo 4º de la ley 1.917.

En cuanto a las conexiones de cloacas, hasta ahora se realizaban por cuenta de los interesados y ha sido suprimida esa diferencia, fundada en razones de orden constructivo.

LEY 1.917

Artículo 4º — La construcción de la sección externa se hará por cuenta de la Nación, con los fondos a que se refiere la ley 1.575 —Autorizando al Poder Ejecutivo para emitir hasta ocho millones de pesos en títulos de renta pública en las obras de salubridad de la Capital— de 31 de octubre de 1884.

La sección interna, comprendidas también las obras necesarias para la provisión de agua desde el arranque del caño de servicio, serán construídas y costeadas por los propietarios, de acuerdo con la reglamentación que determine el Poder Ejecutivo y bajo la inmediata dirección y vigilancia de la comisión de las obras de salubridad.

Art. 31. — Los propietarios o poseedores estarán obligados a instalar los servicios de agua y desagüe cloacal y a mantener en buen estado las instalaciones.

El presente artículo, con algunas modificaciones, reproduce los artículos 7º y 14 de la ley 1.917 del año 1886.

Los trabajos se ejecutarán con intervención y aprobación de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación. Los empleados autorizados para vigilar y dirigir los trabajos domiciliarios o inspeccionar las instalaciones tendrán acceso a los inmuebles, con las limitaciones que fije la reglamentación. Cuando se opusiere resistencia, el administrador general o el jefe del distrito local pedirán el auxilio de la fuerza pública, el que será acordado por las autoridades policiales.

LEY 1.917

Art. 7º — Los propietarios estarán obligados:

A abonar una cuota destinada a cubrir los gastos administrativos de dirección e inspección de las obras durante la construcción de las suyas, cuya cuota será fijada en oportunidad con arreglo al costo de las mismas.

A limpiar, cegar o desinfectar y cubrir debidamente todo sumidero, pozo u otro receptáculo que exista en sus fincas, de acuerdo con las instrucciones que en cada caso se les dé y dentro de los plazos que se les señale al efecto.

Requerir el consentimiento previo de la comisión, para componer, alterar y remover en cualquier sentido las obras domiciliarias una vez construídas. En estos casos las modificaciones se harán en las condiciones prescritas para las obras nuevas.

Mantener en buen estado las instalaciones y cubrir los gastos que demanden las reparaciones hasta la cloaca colectiva, cuando éstas fueren motivadas por obstrucciones y descomposiciones en las obras domiciliarias.

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Análisis del proyecto de ley

Art. 14. — Los ingenieros inspectores u otros empleados autorizados para dirigir o vigilar los trabajos domiciliarios, tendrán libre acceso a los inmuebles con las limitaciones siguientes:

- 1º No podrán penetrar en una propiedad sino para el desempeño de sus funciones acreditando previamente el carácter que invisten al dueño, gerente, inquilino principal o quien lo represente;
- 2º No podrán hacer las visitas domiciliarias sino en las horas comprendidas desde la salida hasta la puesta del sol, salvo casos de extraordinaria urgencia, en el que deberán proveerse de autorización especial dada por la Comisión Directiva de las obras;
- 3º Cuando se opusiere resistencia pedirán, por intermedio de la misma comisión el auxilio de la fuerza pública, que deberá ser acordado por la autoridad correspondiente. Antes de proceder, la comisión citará al interesado, quien deberá concurrir inmediatamente.

Art. 32. — Desde la fecha en que se inicie la construcción de las obras queda prohibida la perforación de pozos, a cualquier profundidad, sin permiso previo de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, dentro del radio servido, o a una distancia inferior a quinientos metros de cualquier fuente de provisión de agua.

Los pozos existentes dentro del radio servido cuyas aguas se utilicen para la bebida, deberán ser cegados bajo la inspección de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, una vez habilitada la provisión de agua. La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación podrá autorizar la conservación de aquellos pozos cuya agua se utilice para riego o para industrias ajenas a la alimentación de las personas, cuando no constituyan un peligro para las demás napas subterráneas. Los pozos existentes dentro del radio de quinientos metros de las fuentes de provisión de agua, deberán ser cegados si existiera peligro de contaminación de éstas.

Una vez libradas al servicio las instalaciones de provisión de agua potable y desagües por Obras Sanitarias de la Nación, corresponde el cegado de pozos, porque se hacen ya innecesarios y contarían su subsistencia a los fines que se persiguen en favor de la salud pública, pues ellos pueden alterar las condiciones de las napas subterráneas cuya vigilancia tiene a su cargo esta repartición, aparte de que tratándose de pozos para bebida, escaparían al control de las autoridades competentes.

Se establece una excepción, autorizando la conservación de pozos, cuando su agua no se destine al consumo humano ni a la higiene.

Cláusulas generales de los convenios

Artículo 12. — Los pozos existentes dentro del radio servido cuyas aguas se utilicen para la bebida, deberán ser cegados bajo la inspección de Obras Sanitarias de la Nación, una vez habilitada la provisión de agua y vencidos los plazos acordados para la instalación de los servicios domiciliarios.

Obras Sanitarias de la Nación podrá autorizar la conservación de aquellos pozos cuya agua se utilice para riego o para industrias ajenas a la alimentación de las personas, cuando no constituyan un peligro para las demás napas subterráneas.

Los pozos existentes dentro del radio de 500 metros de las fuentes de provisión de agua deberán ser cegados si existiera peligro de contaminación.

Art. 33. — En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 31 y 32, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación podrá proceder de oficio a la obturación de los pozos y a construir o reparar las obras internas, así como a reconstruirlas si hubieran sido mal ejecutadas, por cuenta de los propietarios o poseedores y con el auxilio de la fuerza pública, el que será prestado en la forma prevista en el artículo 31.

Este artículo se refiere a la construcción de oficio de obras cuando los particulares no han dado cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos anteriores, debiendo ser por cuenta de ellos la realización de las obras y como lo que se persigue es la salubridad de la población, se llega al amparo de la fuerza pública para lograr la ejecución de las obras.

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo**Análisis del proyecto de ley***Cláusulas generales de los convenios*

Artículo 10. — Los propietarios podrán solicitar de Obras Sanitarias de la Nación que efectúe por cuenta de ellos los trabajos a que se refiere el artículo anterior en las condiciones establecidas en el reglamento de obras domiciliarias.

No construyéndose las obras por los propietarios, ni solicitada su ejecución en la forma que contempla este artículo, Obras Sanitarias de la Nación podrá realizarlas de oficio, con el auxilio de la fuerza pública y por cuenta de aquéllos.

Art. 34. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación estará autorizada a tomar las medidas necesarias para sanear los cursos de agua, en caso de que pudieran afectar la salubridad de las ciudades o pueblos en que preste sus servicios, y para impedir la contaminación directa o indirecta de las fuentes de provisión de agua que utilice, y queda facultada a disponer la clausura de los establecimientos industriales cuyos dueños no dieran cumplimiento a las disposiciones que ordene.

Al saneamiento de cursos de agua se refiere el presente artículo, basado en la jurisdicción que compete a la Nación sobre los ríos nacionales para lo cual la ley 2.797 dispone que las aguas cloacales de las poblaciones y residuos nocivos de los establecimientos industriales, no podrán ser arrojados a los mismos sin someterseles previamente a un procedimiento eficaz de depuración.

Por la ley 4.198 —Contaminación de agua del río de la Plata y pozos semisurgentes— se autoriza al Poder Ejecutivo a tomar dentro del territorio de la Capital Federal todas las medidas conducentes a impedir la contaminación del agua del río de la Plata. Dentro de este criterio, por este artículo, se extienden las medidas de control en cuanto a la insalubridad de los cursos de agua que puedan afectar las ciudades o pueblos en que Obras Sanitarias de la Nación presta sus servicios o puedan constituir un peligro para la contaminación directa o indirecta de las fuentes de provisión.

LEY 2.797*Purificación de aguas cloacales y residuos nocivos*

Artículo 1º — Las aguas cloacales de las poblaciones y los residuos nocivos de los establecimientos industriales no podrán ser arrojados a los ríos de la República, si no han sido sometidos previamente a un procedimiento eficaz de purificación.

LEY 4.198*Contaminación del agua del río de la Plata y de pozos semisurgentes*

Artículo 1º — Desde la promulgación de la presente ley, queda facultado el Poder Ejecutivo para adoptar, dentro del territorio de la Capital Federal, todas las medidas conducentes a impedir la contaminación del agua del río de la Plata, y la de la segunda napa, comúnmente llamada semisurgente, en cuanto ella pueda afectar la provisión a la población del mismo.

Artículo 5º — El Poder Ejecutivo por intermedio de la Dirección de las Obras de Salubridad, ejercerá la inspección y vigilancia necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, quedando a cargo de dicha dirección la aplicación de los reglamentos y disposiciones que al efecto dicte el Poder Ejecutivo.

El presente artículo se refiere al transporte de líquidos residuales en vehículos de los llamados "carros atmosféricos", que por lo específico de los servicios, la reglamentación de los mismos, debe estar a cargo de Obras Sanitarias de la Nación.

Art. 35. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación ejercerá la vigilancia del vertimiento de líquidos residuales transportados por vehículos en las localidades donde presta servicios, con sujeción a los reglamentos que dicte.

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Art. 36. — Tanto la provisión de agua a la población como el desagüe de las aguas servidas están provistos para los usos ordinarios dentro de los inmuebles, no comprendiéndose en tal carácter el uso del agua para riego o para las industrias que no elaboran artículos alimenticios ni el desagüe de establecimientos industriales.

Art. 37. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación estará facultada a imponer penas pecuniarias que no excedan de quinientos pesos moneda nacional (\$ 500), a los propietarios que no cumplan con las obligaciones establecidas en la presente ley o en el reglamento para la construcción y funcionamiento de las obras domiciliarias. Estas multas podrán ser hasta de mil pesos moneda nacional (\$ 1.000), en el caso de establecimientos industriales.

Los importes recaudados por la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación en concepto de multas se incorporarán a su renta, como compensación a los gastos que originen las funciones de inspección y contralor que la presente ley pone a su cargo.

Análisis del proyecto de ley

El presente artículo se refiere al uso ordinario de los servicios sanitarios cuya finalidad fundamental es la higiene y la salud de los habitantes; por ello, la repartición no está obligada a suministrar sus instalaciones para otros usos, aun cuando puede hacerlo, siempre que no origine inconvenientes, pero en este caso convendrá la forma y precio del servicio atendiendo el destino del mismo.

Por el presente artículo se faculta a la repartición a imponer multas, para lo cual se han tomado los artículos 13 de la ley 1.917, 6º de la ley 4.198 y 14 de «Cláusulas generales de los convenios».

LEY 1.917

Artículo 13. — La Comisión de Obras de Salubridad podrá imponer penas pecuniarias que no bajen de diez pesos moneda nacional (\$ 10), ni excedan de doscientos pesos nacionales (\$ 200), a los propietarios que no cumplan con las obligaciones establecidas en la presente ley o en el reglamento aprobado por el Poder Ejecutivo.

Las multas serán previamente establecidas en dicho reglamento, y su cobro se hará en la forma establecida en el artículo 9º.

LEY 4.198

Artículo 6º — El Poder Ejecutivo podrá imponer multas hasta la suma de mil pesos (\$ 1.000), a los infractores de las disposiciones reglamentarias de esta ley, quedando igualmente autorizado para efectuar por cuenta de los interesados, cuando éstos se rehúsen a hacerlos, los trabajos u operaciones de saneamiento que se les ordene, y para clausurar cualquier establecimiento insalubre mientras no se ponga en condiciones reglamentarias.

Cláusulas generales de los convenios

Artículo 15. — Todo inmueble habitable o baldío está obligado a abonar las cuotas de acuerdo con las tarifas, que serán iguales a las de la Capital Federal y sufrirán las rebajas, aumentos y modificaciones que para dichas tarifas apruebe el Poder Ejecutivo nacional, salvo las diferencias que se expresan a continuación:

- a) La escala de alquileres y la de valores de los terrenos baldíos serán las que figuran en las planillas adjuntas;
- b) Todos los inmuebles edificados de propiedad de la Nación, de la provincia o del municipio, cualquiera sea la índole de su ocupación, abonarán los servicios de acuerdo con las tarifas. Los servicios de agua y de cloaca no se cobrarán cuando dichos inmuebles carezcan de las instalaciones domiciliarias respectivas.

La municipalidad deberá abonar la totalidad del agua corriente que utilice para riego y

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Análisis del proyecto de ley

Art. 38. — Todo inmueble ubicado en las zonas dotadas de servicios, aun cuando carezca de instalaciones domiciliarias, estará obligado a abonar las cuotas que correspondan con arreglo a las tarifas. Este pago será obligatorio también para los inmuebles que están desocupados.

Las tarifas serán iguales para todos los distritos y estarán sujetas a las rebajas, aumentos y modificaciones que apruebe el Poder Ejecutivo nacional.

En la ciudad de Buenos Aires continuará la vigencia de las tarifas que fije el Poder Ejecutivo, hasta que comience la aplicación de las tasas establecidas en el decreto 33.405/44, de creación de la Dirección Inmobiliaria Nacional, ratificado por la ley 12.922.

limpieza de las calles, plazas y paseos públicos, a razón de cinco centavos moneda nacional (\$ 0,05) por metro cúbico;

- c) Además de los terrenos baldíos de propiedad del gobierno de la Nación y de la municipalidad, están también eximidos del pago de las cuotas de desagüe cloacal y pluvial, y asimismo del pago del servicio de agua cuando carezcan de la conexión respectiva, los terrenos baldíos del gobierno de la provincia.

El presente artículo se refiere a la obligatoriedad del pago de las cuotas por los servicios sanitarios y la uniformidad de tarifas en todo el país, cuyos antecedentes son los artículos 7º de la ley 1.917, 15 de «Cláusulas generales de los convenios», 1º de la ley 12.140 y 187 de la ley 12.345.

LEY 1917

Artículo 7º — Los propietarios están obligados:

- a) A abonar una cuota destinada a cubrir los gastos administrativos de dirección e inspección de las obras durante la construcción de las suyas, cuya cuota será fijada en oportunidad con arreglo al costo de las mismas;
- b) A limpiar, cegar o desinfectar y cubrir debidamente todo sumidero, pozo u otro receptáculo que exista en sus fincas, de acuerdo con las instrucciones que en cada caso se les de y dentro de los plazos que se les señale al efecto;
- c) Requerir el consentimiento previo de la comisión para componer, alterar y remover en cualquier sentido las obras domiciliarias una vez construidas. En estos casos las modificaciones se harán en las condiciones prescritas para las obras nuevas;
- d) Mantener en buen estado las instalaciones y cubrir los gastos que demanden las reparaciones hasta la cloaca colectiva, cuando éstos fueren motivados por obstrucciones y descomposiciones en las obras domiciliarias.

Cláusulas generales de los convenios

Artículo 15. — (Ver consideraciones del artículo 37 que antecede.)

LEY 12.140

Artículo 1º — Las tarifas establecidas por los artículos 6º y 7º de la ley 10.998 para el pago de los servicios sanitarios en las obras construidas bajo su régimen, no deberán exceder de las vigentes en la Capital Federal, siempre que cubran anualmente los gastos de explotación.

LEY 12.345

Artículo 187. — Autorízase al Poder Ejecutivo a revisar las tarifas de servicios sanitarios vigentes en

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Art. 39. — Todos los inmuebles edificados de propiedad de la Nación, de las provincias o de los municipios, cualquiera sea la índole de su ocupación, abonarán los servicios de acuerdo con las tarifas. Los servicios de agua y de cloacas no se cobrarán cuando dichos inmuebles carezcan de las instalaciones domiciliarias.

Las municipalidades deberán abonar el agua corriente que utilicen para riego y limpieza de las calles, plazas y paseos públicos con arreglo a la tarifa uniforme que apruebe el Poder Ejecutivo nacional.

Art. 40. — No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires estará excluida del pago del servicio de agua que utilice para riego de las calles, plazas y paseos públicos, dentro de los límites que establezca la reglamentación que dicte la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación con acuerdo del Poder Ejecutivo. Igualmente estará eximida del pago de ese servicio y de los de desagüe cloacal y pluvial que correspondan a las fincas de su propiedad ocupadas por sus oficinas o que están afectadas a una función pública gratuita. Quedan, en cambio, obligadas al pago de los servicios todas las fincas que no estén en las condiciones antedichas.

Los servicios de agua y de cloacas no se cobrarán cuando dichos inmuebles carezcan de las instalaciones domiciliarias.

Art. 41. — Los terrenos baldíos de propiedad de la Nación, de las provincias y de las municipalidades, estarán eximidos del pago de las cuotas de desagüe pluvial. También estarán exentos del pago de los servicios de agua y de desagüe cloacal cuando carezcan de las conexiones respectivas.

Art. 42. — Los importes de las boletas por servicios sanitarios y demás cuentas que emita la Admi-

Análisis del proyecto de ley

aquellas localidades dotadas de obras construídas bajo el régimen de la ley 10.998, cuando los gastos de explotación no alcanzaren a ser cubiertos por las que autoriza el artículo 1º de la ley 12.140. Si la capacidad contributiva de las poblaciones respectivas exigiese la reducción de las tarifas al nivel de las que rigen en la Capital Federal, el déficit que resultare de su aplicación será cubierto de rentas generales a título de anticipo y con cargo de reintegro, abriéndose al efecto una cuenta especial por el Ministerio de Hacienda. Las partidas necesarias para cubrir ese déficit serán incluidas anualmente en el presupuesto de gastos de la Nación.

Queda fijado que continuará esta vigencia en la ciudad de Buenos Aires, hasta que se apliquen las bases del decreto 33.405/944 - Creación de la Dirección Nacional Inmobiliaria. Ley 12.922.

Este artículo se refiere al pago de servicios por las propiedades fiscales cuyo antecedente es el artículo 10 de la ley 12.140.

LEY 12.140

Artículo 10. — El gobierno nacional, provincial o comunal o las reparticiones autónomas, deberán efectuar por su cuenta el pago de los servicios que reciban de Obras Sanitarias de la Nación, correspondientes a los inmuebles de su propiedad. La Dirección de Obras Sanitarias de la Nación podrá convenir con dichas autoridades tarifas especiales para la provisión de agua con destino a riego de paseos públicos, limpieza de calles, mercados, mataderos y otros servicios similares.

El presente artículo se refiere a la exención de pago a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en base a la disposición del artículo 4º de la ley 2.927.

LEY 2.927

Artículo 4º — La municipalidad de la Capital de la República queda exonerada al pago de los servicios de cloacas y del agua que consuma para el riego de las calles, plazas, paseos públicos y demás establecimientos municipales.

La exención de pagos por los terrenos baldíos e inmuebles sin dotación de servicios, que son de propiedad fiscal, se basa en razones de orden administrativo que han determinado la conveniencia de que el Estado nacional o de las provincias paguen los servicios que reciben y no juegan esos pagos cuando los servicios no se prestan por tratarse de terrenos sin edificar o de edificios sin instalaciones.

Este artículo se refiere a la aplicación de recargos cuyo antecedente es lo previsto en el artículo

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

nistración General de Obras Sanitarias de la Nación, cuyo pago no se efectúe en la época establecida al efecto, serán gravados con un recargo del 3 % por cada mes de atraso, hasta un máximo del 15 %, luego de lo cual serán pasadas a cobro por vía de apremio con dicho recargo del 15 % sobre su importe. Los valores correspondientes al recargo progresivo anterior, sufrirán un recargo fijo del 25 % sobre su importe.

Las sumas recaudadas en concepto de recargo tendrán el carácter de compensatorias de los mayores gastos originados por la falta de percepción en oportunidad del importe de los servicios.

Los recargos establecidos en el presente artículo no se aplicarán a las cuentas correspondientes a inmuebles de propiedad de la Nación, de las provincias o de las municipalidades.

Art. 43. — Los inmuebles en los cuales la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación hubiere construido obras conforme se establece en el artículo 51 por cuenta de los propietarios, y los que adeuden servicios, multas y cualquier otra suma de acuerdo con las disposiciones de esta ley, quedarán afectados al pago de la deuda hasta su cancelación. El crédito correspondiente a las obras mencionadas tendrá el privilegio establecido en el artículo 3.931 del Código Civil; el correspondiente a servicios y sus recargos tendrá el establecido en el artículo 3.879, inciso 2º y 3.880, inciso 5º del mismo código. Ambos privarán sobre el crédito hipotecario posterior a las construcciones o a la prestación de los servicios, respectivamente.

Art. 44. — Antes de escriturarse una transferencia de dominio o constitución de derechos reales, o de ordenarse la inscripción de una sentencia o auto judicial que declare o reconozca una transmisión de derechos sobre inmuebles, se requerirá de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación un certificado en el que conste la deuda que por cualquier concepto reconozca el inmueble de que se trate. Dicho certificado tendrá validez de quince días contados desde la fecha de su expedición.

Los escribanos públicos deberán incorporar dicho certificado al protocolo en caso de escrituración, así como la posterior constancia de pago, si éste resultare obligatorio según lo que se establece a continuación.

Art. 45. — El pago de los servicios, recargos y multas, como así también el de las cuotas vencidas en el caso de construcción de obras domiciliarias, se hará indefectiblemente y en su totalidad en toda clase de escrituras dentro de los diez días subsiguientes a su otorgamiento.

Análisis del proyecto de ley

9º de la ley 11.744 - Desagües pluviales en la Capital Federal.

El recargo a los servicios en mora responde a la necesidad de asegurar la percepción regular de los importes, base de la económica y eficiente prestación de aquéllos. Para obtener esos beneficios y a la vez resulte lo menos oneroso posible a los usuarios afectados, el recargo tiene el carácter de progresivo, comenzando con el 3 % que se aplica luego de transcurrido un mes de la última fecha para el pago, y aumenta en una proporción igual por cada nuevo mes de atraso, hasta el máximo de 15 % que se alcanza cuando la mora es de seis meses.

Los artículos 43, 44 y 45, se correlacionan en la afectación de los inmuebles al pago de las deudas y certificados de escribanos. Con referencia a la afectación de los inmuebles, en los artículos y leyes siguientes: artículo 11 de la ley 1.917; artículo 21 de la ley 10.998 y artículo 9º de la ley 11.744.

Respecto a los certificados a cargo de los escribanos, se ha modificado el sistema actual para ajustarlo a la realidad, a la vez que se señala un breve plazo dentro del cual el oficial público deberá cumplir ineludiblemente la operación.

El sistema actual, cuando el escribano retiene y hace el pago sin que la ley le confiera esa función, no se sabe en qué carácter lo hace; si como oficial público o mandatario de los otorgantes o cuál de ellos; si es pago de un tercero, etcétera. Todo ello suele traducirse luego en graves problemas cuando se alega error, prescripción, etcétera, mientras que por la presente ley se convierte el pago en un deber legal del escribano, desapareciendo o simplificándose así aquellos problemas.

LEY 1.917

Artículo 11. — Los inmuebles en que el Poder Ejecutivo construyese obras por cuenta de los propietarios quedan afectados al pago de la deuda hasta su cancelación. Los escribanos no otorgarán escritura de transferencia de la propiedad o constitución de derechos reales sin el certificado de la comisión que establezca haberse pagado el importe de las obras a que se refiere la ley, y en su caso las sumas que se adeuden por cuotas no vencidas.

LEY 10.998

Artículo 21. — Los inmuebles en que Obras Sanitarias de la Nación construyese obras de acuerdo con los artículos 19 y 20, quedarán afectados al pago de la deuda hasta su cancelación.

A este efecto, y por lo que respecta a las ciudades de provincia, constará en los convenios con los go-

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Para las cuotas no vencidas de la deuda por construcciones realizadas de acuerdo al artículo 51, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación podrá, previa solicitud de los interesados, autorizar que las facilidades de pago concedidas se mantengan, sea en favor del adquirente en caso de transferencia de dominio, sea del mismo propietario en caso de constitución de derechos reales.

Art. 46. — El Registro de la Propiedad de la Capital Federal y Territorios Nacionales, y los de las provincias, no inscribirán títulos de dominio o de constitución de derechos reales sin la constancia, en los testimonios de las respectivas escrituras, de haberse abonado la deuda certificada por la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, o de haberse aceptado la substitución del deudor o el mantenimiento de las facilidades si se trata de deuda no vencida correspondiente a obras construidas conforme al artículo 51. El mismo requisito se exigirá en los oficios que ordenen la inscripción de declaratorias de herederos, testamentos, autos o sentencias que reconozcan, declaren o transfieran tales derechos.

Art. 47. — En las ciudades y pueblos de provincias y territorios nacionales, será juez competente para entender en las demandas que se inicien por cobros de las sumas que se adeuden de conformidad con la presente ley, el juez federal de sección o el juez letrado de territorio que corresponda.

La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación o el apoderado que ésta designe, intervendrá en dichos juicios como representante del fisco.

Art. 48. — El cobro de las cuentas se hará por vía de apremio que establece la ley nacional de procedimientos, sirviendo de suficiente título el certificado que expida la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación designando a los inmuebles deudores y expresando la deuda que resulte de sus libros.

En este juicio no se admitirán otras excepciones que las de pago, prescripción, falsedad extrínseca del título y falta de personería, debiendo probarse la primera con los correspondientes recibos de pago y la última con documentos que acrediten que el demandado posee por cuenta ajena.

No procederá en él la obligación de afianzar las resultas de juicios ordinarios.

Análisis del proyecto de ley

biernos respectivos, que éstos dictarán leyes estableciendo que los escribanos públicos no otorgarán escrituras de transferencia de la propiedad o de constitución de derechos reales sin el certificado de Obras Sanitarias de la Nación que establezca el haberse pagado el importe de las obras y, en su caso, el total de las cuotas vencidas.

LEY 11.744

Artículo 9º — El cobro de la tasa a que se refiere el artículo 3º se hará, como las demás, de Obras Sanitarias y recargos establecidos, conforme al procedimiento que se sigue para el pago de la contribución territorial. Los escribanos no otorgarán escrituras de transferencias de la propiedad o de constitución de otros derechos reales sin el certificado de Obras Sanitarias de la Nación que establezca no adeudarse suma alguna. El Registro de la Propiedad no inscribirá declaratorias de herederos ni hijuelas sin el referido certificado.

Este artículo se refiere a la obligación para los Registros de la Propiedad de constatar los pagos, cuyos antecedentes están en el artículo 9º de la ley 11.744, que se encuentra transcrito más arriba, al final de las aclaraciones del artículo anterior.

Por este artículo se aclara el juez competente en provincia, para lo cual se fija como norma legal la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diversos fallos a partir del que dictó el 20 de julio de 1927 en el juicio Obras Sanitarias de la Nación c/Vieyra. «Jurisdicción de los Asuntos Judiciales en Provincias».

Los antecedentes de este artículo por el cual se establece el procedimiento para el cobro judicial, se encuentran en el artículo 9º de la ley 1.917 y en el artículo 18 de las «Cláusulas Generales de los Convenios».

LEY 1.917

Artículo 9º — El Poder Ejecutivo procederá por cuenta de los propietarios a la ejecución, reparación o mantenimiento de las obras domiciliarias, cuando éstos lo soliciten o cuando no las practiquen en el plazo señalado. El cobro se hará con arreglo al procedimiento establecido para la recaudación de la contribución directa.

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Análisis del proyecto de ley

Cláusulas generales de los convenios

Artículo 18. — El cobro de las cuentas se hará por la vía de apremio que establece la ley nacional de procedimientos, sirviendo de suficiente título el certificado que expida Obras Sanitarias de la Nación designando a los inmuebles deudores y expresando la deuda que resulte de sus libros.

En este juicio no se admitirán otras excepciones que las de pago y prescripción, debiendo probarse la primera con los correspondientes recibos oficiales.

No procederá en el juicio la obligación de afianzar las resultas de juicios ordinarios.

Art. 49. — Las disposiciones de los artículos 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 48, dejarán de aplicarse en la ciudad de Buenos Aires, una vez que entren en vigencia las previsiones del decreto 33.405/944, ratificado por la ley 12.922, en cuanto resulten incompatibles con las mismas.

Quando se apliquen todas las disposiciones de la ley 12.922, decreto 33.405/944 —creación de la Dirección Nacional Inmobiliaria— se dejará de aplicar en la ciudad de Buenos Aires la mayor parte de los artículos 40 a 48.

LEY 12.922

Ratificación de decretos leyes relativos a impuestos

Decreto 33.405/44

Creación de la Dirección Nacional Inmobiliaria

Artículo 12. — En la Capital Federal, la recaudación de la contribución territorial, del impuesto municipal de alumbrado, barrido y limpieza y de los derechos de agua, cloacas y desagües, se realizará en forma conjunta bajo la denominación de contribución inmobiliaria y de acuerdo a las disposiciones de este decreto. La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación recibirán, de las sumas recaudadas, los porcentajes establecidos en el artículo 30, por la atención de los servicios mencionados que las mismas seguirán prestando conforme a sus propias disposiciones.

Artículo 13. — Con relación a los derechos de agua, cloacas y desagües, la contribución inmobiliaria en la Capital Federal alcanzará exclusivamente a los derechos básicos, subsistiendo en consecuencia la obligación de pago por derechos o servicios complementarios o especiales aplicados de conformidad a las disposiciones vigentes en la materia.

Con respecto a estos servicios complementarios, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5º de la ley 8.889, con las modificaciones establecidas por la ley 9.468, se fijarán las nuevas bases para su percepción; la Dirección Nacional Inmobiliaria concertará con Obras Sanitarias de la Nación el régimen de recaudación más conveniente.

Artículo 30. — El producido de la contribución inmobiliaria de la Capital Federal y de los recargos, fijados en el artículo 53, se distribuirá en las siguientes proporciones: para la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el cuarenta y cinco por ciento (45 %); para Obras Sanitarias de la Nación, el treinta y cinco por ciento (35 %) y para la Nación, el veinte por ciento (20 %). La proporción correspondiente a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires comprende, además, su participación en la contribución territorial reconocida por las disposiciones hasta ahora vigentes.

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Art. 50. — Las instalaciones o inmuebles de propiedad o en posesión de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación estarán exentos de todo impuesto, tasa, contribución de servicios y de mejoras y de cualquier otro gravamen que hayan sancionado o sancionen la Nación, las provincias, sus municipalidades y la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires.

Régimen de construcción de obras domiciliarias con beneficio de su pago por cuotas mensuales

Art. 51. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación podrá construir obras domiciliarias de provisión de agua y desagüe cloacal a pedido y por cuenta de los propietarios, quienes las abonarán en 60 cuotas mensuales e iguales, incluyendo intereses del 5 % anual capitalizado semestralmente.

Art. 52. — Por los fondos suministrados o que se suministren en adelante a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación para la construcción de obras domiciliarias a plazos no se computará la cuota de reintegro. Dichos fondos serán devueltos a la tesorería nacional a medida que resulten innecesarios. En concepto de intereses, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación liquidará al gobierno nacional las mismas sumas que perciba de los propietarios deudores.

Análisis del proyecto de ley

Por este artículo se exceptúa de impuesto a las instalaciones o inmuebles de propiedad o que están en posesión de Obras Sanitarias de la Nación, habiéndose tenido en cuenta que los servicios que presta esta repartición no son lucrativos, razón por la cual se le exime de los gravámenes nacionales, provinciales y locales.

Para estos artículos que se refieren a la construcción de obras domiciliarias a plazos, se ha aplicado el criterio que fluye de los artículos 10 de la ley 1.917, modificado por la ley 11.129; artículos 19 y 20 de la ley 10.998, artículo 37 de la ley 10.223 y artículo 174 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (edición 1942).

LEY 1.917

Artículo 10. — El Poder Ejecutivo podrá conceder hasta cinco años de plazo para el pago de las obras domiciliarias a los propietarios que habiten su finca, siempre que el valor de ésta no exceda de diez mil pesos moneda nacional y no tengan otro bien raíz. En las cuotas parciales que correspondan a cada propietario se incluirán los intereses que el gobierno abone por las sumas invertidas en las construcciones.

LEY 11.129

Artículo 1º — Modifícanse los artículos 1º, 2º y 10 de la ley 1.917, del 4 de diciembre de 1886, en la siguiente forma:

Artículo 1º —
Artículo 2º —

Artículo 10. — El Poder Ejecutivo podrá conceder hasta cinco años de plazo para el pago de las obras domiciliarias a los propietarios que habiten su finca, siempre que el valor de ésta no exceda de \$ 30.000 moneda nacional y que no tenga otro bien raíz. En las cuotas parciales que correspondan a cada propietario, se incluirán los intereses que el gobierno abone por las sumas invertidas en las construcciones.

LEY 10.998

Artículo 19. — En los convenios a que se refiere el artículo 4º de la presente ley podrán fijarse las sumas que se destinarán a construir cloacas domiciliarias a los pequeños propietarios, los que podrán abonar el importe de las mismas en cinco años y con el interés del 5 % dentro de las condiciones de detalle que reglamentará Obras Sanitarias de la Nación.

Artículo 20. — Sólo podrán acogerse a los beneficios del artículo anterior los propietarios de una sola finca, que la habiten, y cuyo valor no exceda por su valuación fiscal de \$ 10.000 moneda nacional, siempre

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo**Análisis del proyecto de ley**

que Obras Sanitarias de la Nación no tenga motivos fundados para creer que el solicitante dispone de medios propios suficientes para hacer construir las obras sin auxilio del gobierno.

LEY 10.223

Artículo 37. — Autorízase al Poder Ejecutivo para entregar a la Dirección de Obras Sanitarias, hasta \$ 7.500.000 moneda nacional en bonos de obras de salubridad del 5 y 1 por 100 creado por ley 4.158, a medida que las necesidades lo exijan y sólo para obras sanitarias de las provincias a que se refiere el ítem 12 del anexo L.

LEY 11.672

(Complementaria permanente de presupuesto)

Artículo 174. — Las disposiciones del artículo 10 de la ley 1.917, que han sido modificadas por la ley 11.129, podrán aplicarse a cualquier edificio existente en todo el país, aunque no lo habite el propietario ni éste sea dueño de esa sola propiedad. Obras Sanitarias de la Nación podrá invertir en el pago de las obras domiciliarias a que se refiere la ley 1.917 y sus modificaciones las cuotas de reembolso que cobre por otras obras ya construidas.

Régimen de rescate de las obras

Art. 53. — Una vez reintegrado el costo de las obras construidas en localidades del interior, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación hará entrega de las mismas a las autoridades locales respectivas a su requerimiento. En caso de no mediar tal requerimiento, la explotación de los servicios seguirá a cargo de la citada repartición nacional, en las condiciones establecidas en la presente ley.

Por el presente artículo se establece el régimen de rescate conforme al alcance establecido por los artículos 12 de la ley 10.998 y 7º de la ley 12.140, con la única variante de establecer que la entrega de la obra no será obligatoria, sino facultativa, para la autoridad local interesada, de manera que ésta podrá dejar la explotación a cargo de la repartición técnica especializada, con lo cual ganará el servicio en eficiencia.

LEY 10.998

Artículo 12. — Anualmente se pasará a las municipalidades o autoridades locales el estado de las cuentas de las obras que corresponda. En cualquier tiempo las municipalidades o autoridades locales, con las formalidades e intervención de los poderes que en cada caso corresponda, podrán rescatar las obras y hacerse cargo de ellas amortizando totalmente su deuda.

LEY 12.140

A los fines del presente artículo, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación elevará cuenta separada por cada ciudad o pueblo en que administre obras de salubridad; acreditará en ella los productos de la explotación y las amortizaciones extraordinarias que efectúen las autoridades locales y debitará los gastos industriales, intereses y cuotas de reintegro. Se entenderá reintegrado el costo de las obras construidas cuando los superávits anuales de esa cuenta alcancen a cubrir la totalidad de los capitales invertidos y las sumas empleadas para atender déficit de explotación que se hubieran producido.

La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación enviará, a pedido de parte, a cada provincia y municipalidad interesada, el balance correspondiente al estado de la cuenta expresada.

Artículo 7º — Una vez autorizada la totalidad de los títulos emitidos con cargo a una obra y reintegradas las sumas a que se refiere el artículo 2º, la Dirección de Obras Sanitarias de la Nación procederá, previa conformidad del Poder Ejecutivo, a entregar al gobierno provincial o comunal correspondiente la administración de la obra, con todas las especies en depósitos que pertenezcan a la misma y los bienes accesorios, de acuerdo a las constancias de sus libros de contabilidad.

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Art. 54. — No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, no serán rescatables los distritos que tengan obras comunes con las de la ciudad de Buenos Aires.

Art. 55. — Los distritos o explotaciones que, correspondiendo a distintas ciudades o pueblos, constituyan, por sus características, un solo sistema, únicamente podrán ser rescatados una vez reintegrado el costo del conjunto de las obras que formen ese sistema. Si las ciudades o pueblos integrantes del sistema estuvieran situados en el territorio de dos o más provincias, el Poder Ejecutivo, por intermedio de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, convendrá previamente con las autoridades respectivas los detalles atinentes al traspaso de las obras.

Régimen de construcción de obras de carácter reducido

Art. 56. — En las localidades en las cuales por escasa población o por falta de capacidad contributiva o por otras razones económicas, resulte inconveniente la instalación del servicio domiciliario de provisión de agua potable, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación establecerá un servicio provisional, a base de surtidores públicos, ubicados en el número y forma suficientes para la provisión gratuita de agua a los habitantes de la población y podrá destinar el excedente de líquido que se produzca para el servicio de abrevaderos públicos de hacienda.

En casos muy especiales, de verdadera excepción, fundados en razones de orden sanitario o económico, y cuando el caudal de agua lo permita, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación podrá conceder conexiones para el servicio domiciliario de determinados establecimientos, cobrando por el mismo la retribución que fije la tarifa que establezca al efecto el Poder Ejecutivo.

Art. 57. — Si realizadas perforaciones, el agua que se obtenga no resulta apta para el consumo humano, pero sí para otros usos domésticos o para abrevar hacienda, las instalaciones serán entregadas a la Dirección General de Agua y Energía Eléctrica o a las autoridades locales para su ulterior atención.

Cláusulas especiales

Art. 58. — Para determinar el orden de ejecución de los estudios y obras en las localidades del interior del país, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación tendrá en cuenta el número de habitantes y sus condiciones de salubridad, a cuyo efecto atenderá las sugerencias que formule al respecto la Secretaría de Salud Pública.

Análisis del proyecto de ley

Este artículo se refiere a los distritos del aglomerado bonaerense, denominado Gran Buenos Aires, que tienen obras comunes con la ciudad de Buenos Aires y que no son rescatables porque todos ellos forman una unidad técnica y funcional, de manera tal que sus explotaciones no podrán ser separadas.

El rescate de distritos con obras comunes sólo podrá hacerse en forma simultánea, porque la amortización no será completa hasta que esté reintegrado el costo del conjunto de obras que forman el solo sistema

El presente artículo es la reproducción del artículo 11 de la ley 12.140, con la supresión del límite de inversión, por considerarlo contrario al fin social de esta clase de obras y se agrega la posibilidad de otorgar conexiones domiciliarias.

LEY 12.140

Artículo 11. — En las localidades en las cuales, por su escasa población o por las características de su planta urbana, las tarifas autorizadas por esta ley no pueden alcanzar a cubrir los gastos de explotación de una instalación permanente de agua potable por medio de conexiones domiciliarias, el Poder Ejecutivo podrá autorizar a Obras Sanitarias de la Nación para que establezca un servicio provisional a base de surtidores públicos ubicados en número y forma suficientes para la provisión gratuita de agua a los habitantes de la localidad. El capital invertido en cada obra y sus accesorios se limitará a una suma cuyo servicio financiero, juntamente con los gastos de explotación, no exceda de la cantidad de \$ 35.000 anuales.

El presupuesto general de la Nación fijará una partida progresiva a ese fin.

Por este artículo se establece que las perforaciones que no produzcan agua para el consumo humano no interesan a los fines que persigue Obras Sanitarias de la Nación, de manera que deben ser entregadas para otros aprovechamientos.

Este artículo establece el orden de prelación en la construcción de obras, conforme a lo establecido por el artículo 2º de la ley 10.998.

LEY 10.998

Artículo 2º — El orden de ejecución de los estudios y proyectos se determinará anualmente en proporción al número de habitantes a servir en toda ciudad,

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Art. 59. — Cuando por razones de salubridad fuere necesario el abastecimiento de agua especialmente potable a núcleos de población situados dentro de las zonas de regadío servidas por obras de la Dirección General de Agua y Energía Eléctrica, la ejecución de las respectivas instalaciones y su explotación corresponderá a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación.

Art. 60. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación podrá convenir con otras reparticiones del Estado, de las provincias o de las municipalidades, ad referendum del Poder Ejecutivo nacional, la instalación de obras y prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable y de desagüe cloacal en determinadas zonas o poblaciones, para satisfacer principalmente necesidades derivadas de explotaciones industriales, ferroviarias, etcétera; quedando a cargo de las reparticiones beneficiadas la financiación de la construcción, mantenimiento y funcionamiento de las obras, total o parcialmente, conforme sea la extensión y carácter de los servicios.

Análisis del proyecto de ley

pueblo o colonia de los territorios nacionales o en cada una de las provincias acogidas a esta ley, conviniéndolo en este caso con los gobiernos respectivos, teniendo en cuenta la mayor urgencia de obras de saneamiento en determinados centros, sobre la base de los informes del Departamento Nacional de Higiene.

Por este artículo y a fin de evitar dudas sobre el abastecimiento de agua en zonas de regadío, se da mayor precisión al artículo 12 de la ley 12.140 y su reglamentación por el decreto 66.250.

DECRETO

Reglamentario del artículo 12 de la ley 12.140

El presidente de la Nación Argentina

DECRETA:

Artículo 1º — Corresponden a Obras Sanitarias de la Nación la ejecución de todas las obras de provisión de agua potable, cuyos estudios o trabajos respectivos no hayan sido iniciados hasta la fecha por la Dirección General de Irrigación, en mérito a la distribución efectuada en el plan de obras públicas del corriente año, teniendo en cuenta las partidas asignadas para obras de aquel carácter en la ley general de presupuesto en vigor.

Artículo 2º — Corresponde a la Dirección General de Irrigación la ejecución de todo trabajo destinado al suministro de agua para usos domésticos, siempre que él sea complemento o forme parte de alguna obra o sistema de aprovechamiento de aguas para riego u otros usos, cuyo estudio o ejecución le compete por los planes anuales de trabajos públicos.

Artículo 3º — Cuando por razones de salubridad fuere necesario el abastecimiento de agua especialmente potable a núcleos de población situados dentro de las zonas de regadío servidas por obras de la Dirección General de Irrigación, la ejecución de los respectivos trabajos corresponderá a Obras Sanitarias de la Nación, debiendo en tal caso la primera suministrarle todos los estudios y antecedentes de que disponga, para el objeto expresado.

Artículo 4º — (Es de fórmula).

Este artículo se refiere a las instalaciones de interés exclusivo para otros organismos facultándose a Obras Sanitarias de la Nación, en base a su competencia técnica, a realizar obras de su especialidad, que no persigan fines de saneamiento urbano, pero por cuenta de la repartición o entidad beneficiada.

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Art. 61. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación estará exenta de todo derecho de aduana, básico o adicional, por la importación de útiles, maquinarias, medios de transporte y cualquier otro material que se destine a la construcción por administración o por contrato o a la explotación de sus obras y servicios.

Art. 62. — Las multas incurridas por falta de cumplimiento, total o parcial, de los contratos celebrados con la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, así como los depósitos dados en garantía cuya pérdida se produzca por las mismas causas, se incorporarán a su renta.

Art. 63. — Declárase de utilidad pública el suelo o el subsuelo de los terrenos de propiedad privada y las fuentes de provisión de agua que sean necesarios para la ejecución de las obras que se construyan o amplíen en virtud de esta ley en todo el territorio de la Nación y queda autorizada la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación para proceder a su expropiación, de acuerdo con la ley de la materia.

Art. 64. — Las provincias y municipalidades entregarán a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, libre de todo cargo o gravamen, los terrenos y fuentes de provisión de agua que les pertenezcan y sean necesarios y constituirán las servidumbres que se requieran para la construcción, ampliación y explotación de las obras.

Art. 65. — Autorízase al Poder Ejecutivo a transferir a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, a título gratuito, los terrenos fiscales que sean necesarios para la ejecución de las obras previstas en esta ley, y concédese igual autorización para transferir con el mismo destino los terrenos municipales de la Capital Federal.

Art. 66. — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, a solicitud de las autoridades locales y con autorización del Poder Ejecutivo, podrá tomar a su cargo, a medida que cuente con los recursos necesarios, las obras o instalaciones de provisión de agua y desagüe cloacal de propiedad provincial o municipal o de empresas privadas que actúen en virtud de concesiones que sirvan a las ciudades y pueblos que se acojan al régimen de la presente ley.

Análisis del proyecto de ley

Este artículo se refiere a la exención de derechos de aduana y adicionales, pues, actualmente por disposición de la ley de aduanas la introducción de materiales, útiles, etcétera, destinados a la construcción de obras públicas de salubridad y agua corriente, está exenta del derecho básico de aduana, pero esta franquicia no rige por el derecho adicional y para materiales afectados a la explotación de las obras. Como por la exención se busca no encarecer las obras, la franquicia debe ser extendida al derecho adicional, como así también para los elementos destinados a la explotación de los servicios, que es la consecuencia directa de la construcción de las instalaciones. Es en este sentido que fué redactado el presente artículo.

Como las infracciones de los propietarios a los incumplimientos de los contratistas de obras, originan perjuicios a la administración, es lógico por ello, que las multas se incorporen a la renta, cuyos importes podrán cubrir total o parcialmente esos perjuicios. El texto de este artículo no tiene otro alcance que lo expresado.

Por este artículo se declara en términos generales de utilidad pública y la expropiación de los bienes inmuebles necesarios, para la prestación de estos servicios.

En el régimen anterior de convenios singulares, se requería una decisión legislativa provincial para cada caso, la que originaba demoras, entorpecimientos en la realización de los trabajos.

Tratándose de obras ejecutadas por la Nación, es suficiente la declaración hecha por la ley nacional de la materia.

Estos artículos se correlacionan, pues, si los inmuebles son de propiedad de la Nación, provincial o municipal; lo lógico es que ellos sean suministrados sin cargo a una obra de beneficio público que se construye y explota sin propósitos de lucro.

Por este artículo se determina el criterio que se fijará al precio que la Nación tomará a su cargo para la adquisición de instalaciones de empresas particulares, a fin de evitar que por concesiones poco previsoras, la adquisición de esas instalaciones resulte onerosa para la Nación. En tal caso la diferencia con respecto a lo establecido en los actos de concesión, quedará a cargo de las provincias o municipalidades interesadas, conforme lo establecen los artículos 17 y 13 de las leyes 10.998 y 12.140, respectivamente.

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo

En caso de que las obras o instalaciones fueran de propiedad provincial o municipal, deberán ser entregadas por sus autoridades sin cargo y su importe se acreditará en la cuenta patrimonial del distrito a formarse para la explotación de las mismas.

Si las obras o instalaciones fueran de pertenencia de empresas privadas, la Administración de Obras Sanitarias de la Nación abonará exclusivamente por las mismas su valor físico de utilización. Entiéndese por valor físico de utilización el valor físico de origen de las instalaciones y maquinarias disminuido por la depreciación de uso, no contándose aquellas instalaciones y maquinarias que no sean utilizables para los nuevos servicios a prestar por la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación. La determinación de esos valores será efectuada por la citada repartición y sometida a la aprobación del Poder Ejecutivo nacional.

Las provincias y municipalidades deberán tomar a su exclusivo cargo el pago de toda suma que deba invertirse para la compra, rescate o expropiación de esas obras e instalaciones de propiedad privada, en cuanto exceda al valor físico de utilización.

Art. 67. — Serán conservadas en poder de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, las usinas construidas y en explotación por la misma para el exclusivo suministro de energía eléctrica a sus propias instalaciones; y podrá construir nuevas usinas, con iguales fines, cuando no existan en las localidades donde se disponga la realización de obras de saneamiento y la Dirección General de Agua y Energía Eléctrica haya expresado su determinación de no instalarlas.

Art. 68. — En los territorios nacionales toda fundación de nuevos centros de población quedará sujeta al dictamen favorable de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, sobre la posibilidad de un adecuado aprovisionamiento de agua potable.

Art. 69. — Quedan derogadas todas las disposiciones legales o reglamentarias en cuanto se opongan a la presente ley, y, en particular, el artículo 172 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto, edición 1943.

Análisis del proyecto de ley**LEY 10.998**

Artículo 17. — Se autoriza al Poder Ejecutivo para celebrar con los gobiernos de provincia los convenios que estime convenientes para la adquisición de las obras de provisión de agua en las ciudades de más de ocho mil habitantes que actualmente tengan ese servicio, imputándose los gastos que se originen a la presente ley.

LEY 12.140

Artículo 13. — Autorízase al Poder Ejecutivo de la Nación, para convenir con los gobiernos provinciales o comunales, la adquisición ad referendum del Congreso, de las obras con que en algunos puntos del país se atienden actualmente los servicios de provisión de agua potable o desagües cloacales, y, asimismo, para adquirir las instalaciones y bienes que estén afectados a tales servicios.

Obras Sanitarias de la Nación ha construido numerosas usinas y su mayoría están destinadas a servir exclusivamente a sus propias instalaciones. Esas usinas deben permanecer bajo su inmediato control porque responden a una necesidad de sus servicios, y por lo tanto, quedan fuera de las previsiones de la ley que centraliza en la Dirección del Agua y la Energía la prestación de los servicios eléctricos; por ello, se determina por este artículo la conservación de las usinas eléctricas.

El presente artículo se refiere a la fundación de nuevos centros de población, y para ello, por el mismo, se solucionan muchos problemas que tienen su origen en la fundación de centros de población que se ha hecho sin haberse determinado previamente las condiciones del lugar en cuanto a la posibilidad de dotarlo de agua potable, siendo ésta una condición básica para el desenvolvimiento de los núcleos urbanos cuya existencia determina o el estancamiento de su desarrollo o la necesidad de realizar trabajos costosos que no guardan relación con la importancia de la población. Para evitar esa eventualidad, se exige el dictamen previo de la repartición especializada.

La derogación de leyes anteriores, a que se refiere este artículo, corresponde a la mención especial del artículo 172 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto y obedece a que sus previsiones carecen de razón de ser, en virtud de que la aplicación de la ley independizará la explotación de las obras.

LEY 11.672

Artículo 172. — (Artículo 172, ley número 11.672, edición 1942). Previa la iniciación de toda obra regida por las leyes números 10.998 y 12.140, la Dirección de Obras Sanitarias deberá obtener la aprobación por parte del Poder Ejecutivo, con

Proyecto de ley del Poder Ejecutivo*Disposición de emergencia*

Art. 70. — Decláranse hechos con facultades suficientes, en cuanto no hayan excedido las que la ley 8.889 otorgaba al extinguido directorio, los actos realizados por Obras Sanitarias de la Nación, o por la Administración Nacional del Agua con respecto a los servicios y obras que competen específicamente a dicha repartición y que hayan sido dispuestos por autoridades y funcionarios que en virtud de decretos del Poder Ejecutivo nacional substituyeron al directorio, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran haber incurrido esas autoridades y funcionarios por inobservancia de otras leyes o reglamentos.

Art. 71. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Dri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Marotta. — Señor presidente: el despacho contenido en la orden del día 170, formulado por las comisiones de Obras Públicas y de Presupuesto y Hacienda, tiene origen en un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que tiende a coordinar una serie de disposiciones que se encuentran diseminadas en numerosas leyes complementarias, cuya interpretación, con el correr del tiempo, se ha hecho dificultosa.

Las primeras leyes que autorizaron el suministro de agua potable a las poblaciones se refirieron a instalaciones que se construyeron, en primer término, en la ciudad de Buenos Aires cuando estaba en embrión su desarrollo. Posteriormente, en virtud de ellas, se construyeron los desagües cloacales y los desagües pluviales.

No hay más que mencionar algunas de las leyes sancionadas, que tienen relación con las obras sanitarias, para darse cuenta de su importancia, a saber: la ley 1.155 del 2 de enero de 1882, que autoriza al Poder Ejecutivo a emitir hasta 8.000.000 de pesos en títulos de la renta pública en obras de salubridad de la Capital; la 1.917 del 25 de noviembre de 1891, sobre vertimientos de líquidos residuales en los ríos de la República; la 8.889, del 18 de julio de 1912, que se refiere a la creación de la Dirección General de Obras Sanitarias de la Nación; la 10.998, del 30 de septiembre de 1919, de construcción de obras sanitarias en ciudades y pueblos de la República; la 11.744, del 28 de septiembre de 1933, sobre construcción de desagües pluviales en la Capital Federal; la 12.140, sancionada el 21 de diciembre de 1934, modificatoria de la ley 10.998, sobre obras sanitarias; y principalmente los decretos leyes siguientes: 33.425 del año 1944, sobre creación de la Administración Nacional del Agua, en lo referente a servicios sanitarios; 29.875 del año 1945, que reglamenta y amplía el anterior, para compren-

Análisis del proyecto de ley

intervención del departamento de Hacienda, del presupuesto y plan de financiación respectivos.

Las disposiciones de emergencia que establece este artículo tienen por objeto dar validez legal a los actos que no hayan violado disposiciones legales o reglamentarias y que fueron actuadas con las facultades de la ley 8.889 otorgada al extinguido directorio.

der la imperiosa necesidad de estructurar una ley orgánica que rija todas las actividades de un organismo de fundamental importancia, como lo es la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación.

En virtud de lo que establecían las leyes que he mencionado, para cada obra en el interior del país debían celebrarse convenios que contenían el proyecto, el régimen de explotación, las tarifas, etcétera.

Posteriormente, estos convenios debían ser aprobados por ordenanzas municipales, por leyes provinciales y, por último, por decretos del Poder Ejecutivo nacional. Cualquier modificación que se hiciera al proyecto, señor presidente, ya fuese una simple ampliación del régimen de explotación o de tarifas, obligaba a celebrar un nuevo convenio con igual trámite, lo que se traducía en una lentísima tramitación que conspiraba contra la eficiencia misma de los servicios e imposibilitaba la adopción de soluciones rápidas en casos de urgencia.

El estudio detenido y meditado de la Comisión de Obras Públicas es acompañado, señor presidente, por un amplio informe escrito para mayor ilustración de los señores diputados, circunstancia que me exime de ser extenso en mi exposición.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Héctor J. Cámpora.

Este proyecto de ley se ha dividido en nueve capítulos, que en forma coordinada expresan las normas legales que deben regir para mayor organicidad de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, y que son los siguientes: 1º La institución; 2º Objeto de la institución; 3º Organización, atribuciones, deberes y autoridades; 4º Aplicabilidad de la presente ley y régimen de convención; 5º Régimen financiero; 6º Régimen de explotación; 7º Régimen de construcción de obras domici-

liarias, con beneficio de su pago por cuotas; 8º Cláusulas especiales, y 9º Disposición de emergencia.

Solamente comentaré, señor presidente, algunos de sus artículos, al solo efecto de reforzar su contenido. Así, por ejemplo, en el artículo 2º del despacho, se define el objeto de la institución, autorizando a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación a establecer industrias para extraer o producir la materia prima para sus servicios. En realidad, no se trata más que de legalizar una situación existente, porque todos sabemos bien que la mencionada repartición posee diversas fábricas y talleres en pleno funcionamiento que producen elementos que se requieren para la construcción, renovación y ampliación de las obras que debe ejecutar.

El artículo 4º determina las facultades a que debe ajustar sus actividades el organismo que, con muy pocas modificaciones, son las establecidas en varios incisos del artículo 4º de la ley 8.889. En el inciso a) de ese artículo se amplía, para mayor claridad, adoptando las medidas que estime necesarias la Administración General, para la debida prestación de los servicios a su cargo, ajustándolo a las disposiciones de la presente ley y a las reglamentaciones en vigor, o que en lo sucesivo apruebe el Poder Ejecutivo.

Por el artículo 5º se modifica la estructura del órgano directivo de la institución, reemplazando al directorio, como lo establece la ley 8.889 en su artículo 3º, por un consejo de administración, el que será presidido por un administrador general y con los directores generales: técnico, de explotación comercial, de finanzas y contabilidad, de asuntos jurídicos y de personal y asistencia social, debido a que ello está más en consonancia con la labor que desarrolla, teniendo en cuenta que los problemas a resolver son de carácter técnico.

Con respecto a la aplicación del régimen de convención, señor presidente, que se establece en los artículos 9º al 14 inclusive del proyecto de ley, se especifica que no es necesario el acogimiento expreso por la municipalidad de la Capital Federal y los territorios nacionales (artículo 9º). Se incorporan las obras que se hayan construido, las que están en vías de ejecución y las proyectadas en virtud de las leyes 4.158, 10.998 y 12.140 y el decreto ley 33.425/44. Por este decreto se le dió otra estructura más amplia al organismo, anexándole la Dirección de Irrigación, que se denominó Administración Nacional del Agua (ANDA), que, posteriormente, por otro decreto, volvió a su organización actual.

En el artículo 14, que se refiere al acogimiento de las ciudades y pueblos al régimen de la presente ley, se establece que no podrán otor-

garse en los mismos concesiones para la prestación de servicios de provisión de agua y desagües cloacales, asegurando para la Nación, por medio de Obras Sanitarias, un régimen de exclusividad en la prestación de los servicios.

La exclusividad establecida, señor presidente, es perfectamente explicable por cuanto si la municipalidad se ha acogido al régimen de la presente ley es para que la Nación construya las obras, y resulta ilógico que luego de adoptada esa decisión resuelva encarar por sí misma la ejecución de los trabajos; pero si la Nación no se encuentra en condiciones de realizar las obras transcurrido el plazo de tres años, podrá, en este caso, la municipalidad recobrar la facultad de llevarlas a cabo previo desistimiento, acogiéndose al artículo 11.

No considero necesario, señor presidente, detenerme en mayores detalles en este capítulo, por cuanto en el informe escrito se mencionan las partes pertinentes de las leyes citadas.

El capítulo que se refiere al régimen financiero, artículos 15 al 21 inclusive, tiene por objeto ajustarse a la ley de contabilidad, número 12.961, y con algunas modificaciones de detalle a los artículos 8º, 9º y 10 de la ley 8.889, que actualmente rige.

Del presente capítulo quiero destacar la importancia del artículo 18, que acuerda un crédito anual de 200.000.000 de pesos para los gastos que demanden los proyectos, construcción, renovación y ampliación de obras sanitarias en todo el territorio de la Nación que se incorporan a las leyes 12.576 y 12.815 de crédito para obras públicas.

Este nuevo sistema, señor presidente, viene a resolver un problema que se ha planteado con frecuencia, por la insuficiencia de los fondos que se le otorgaban, lo que ocasionaba muchas veces la paralización de las obras. Por otra parte, no se operará el arrastre del mencionado crédito, debiéndose cancelar los excedentes anuales de no haberse empleado en las obras especificadas en la ley.

En cuanto al artículo 19, que se refiere a los gastos de explotación y servicios financieros de las obras construídas en el país, ha sido contemplado con el nuevo concepto de carácter social, como son las de saneamiento. Con el concepto anterior se las consideraba retributivas. En consecuencia, mantenemos esta nueva orientación, porque son los núcleos urbanos de poblaciones modestas las de menor capacidad contributiva y que requieren con mayor urgencia esta clase de servicios, teniendo en cuenta que carecen de recursos. Por esta razón, el aporte que se destine de rentas generales no es sino la ayuda de toda la Nación a fin de contribuir al bienestar de los pueblos, que por una u otra causa. son menos favorecidos en su potencial económico.

El artículo 20 fija como interés de los capitales recibidos el menor nominal de los títulos de la deuda pública.

De conformidad con el reordenamiento financiero establecido por el Poder Ejecutivo de la Nación, por el decreto 75.517 del 26 de octubre de 1940, conforme se menciona en el citado artículo, la repartición recibe del gobierno nacional capitales en efectivo para la ejecución de las obras. Estos capitales los entrega el gobierno nacional, conforme a los planes de obras anuales, previamente aprobados, cuyo importe lo obtiene de la negociación de títulos de la deuda pública.

En el artículo 10 del ya citado decreto se estableció el interés anual del 5 %, mientras subsistieran las condiciones del mercado de dinero en ese momento, lo que significa que se preveía en ese artículo la posibilidad —hoy producida— de la variación del tipo de interés de los títulos en plaza.

En consecuencia, puede considerarse equitativa la determinación del tipo de interés que se establece en este artículo, es decir, paralelo a la situación del mercado de dinero.

La cuota de amortización del 2 % que se proyecta, ha sido fijada teniendo en cuenta el término medio de vida probable del conjunto de las instalaciones de provisión de agua y desagües, que se estima en un período de cincuenta años y que es el resultado de los estudios técnicos y la experiencia recogida en la repartición a través de larga práctica.

La cancelación de la deuda por servicios financieros de interés y amortización no pagados, y las sumas recibidas para cubrir el déficit de explotación, es una necesidad financiera nacida de la naturaleza de los fines de la repartición, que es la de cumplir un servicio público de primera necesidad de carácter social, sin considerar la capacidad económica de cada localidad, donde la obra se realiza cuando razones de salubridad pública lo imponen.

Si bien esta condonación disminuye la deuda de la entidad con el gobierno nacional, figurando en el pasivo de la administración con carácter no financiero, derivado de su condición de no exigible, en cambio, por otra parte, la totalidad de aquella suma se mantiene gravitando en los resultados de explotación de cada una de las cuentas de acuerdo con el artículo 53 de este proyecto.

Con respecto al régimen de explotación, los artículos 22 y 23 se refieren a la prórroga del presupuesto para realizar la adquisición de los materiales, que requiera la explotación de los servicios, teniendo en cuenta el carácter público de los mismos.

Esta cláusula no es nueva, pues está contemplada en otras leyes orgánicas de reparticiones centralizadas, y su vigencia no obstará

para el juego de las previsiones contenidas en el artículo 16 de la ley 12.961.

El artículo 16 de la ley antes mencionada, en el primer párrafo dice: «Si al iniciarse el año financiero no se hubiera aprobado el presupuesto a regir, el Poder Ejecutivo podrá autorizar provisionalmente, en base al proyecto que dentro del plazo del artículo anterior hubiera presentado al Congreso, los créditos indispensables para la continuidad de la marcha de la administración y sus ramas descentralizadas, por los conceptos generales comprendidos en el mismo.»

Por el artículo 25 del despacho que consideramos, señor presidente, se contempla la situación de las empresas de servicios públicos, instituciones, o particulares que tengan en uso u ocupen el suelo o subsuelo, las que al renovar —a pedido de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación— sus instalaciones por ser necesarias para la construcción o explotación de las obras previstas en la presente ley, los gastos que demanden esos trabajos serán abonados por la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, exceptuándose a los concesionarios que están obligados, porque así lo establecen sus respectivos contratos de concesión, existiendo sobre este aspecto jurisprudencia sentada.

Por el artículo 31 se autoriza a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación a tomar las medidas necesarias para sanear los cursos de agua que pudieran afectar la salubridad de las ciudades y pueblos en que preste sus servicios, a efectos de impedir la contaminación directa o indirecta de las fuentes de provisión del agua que utilice, quedando asimismo facultada para proceder a clausurar los establecimientos industriales que no dieran cumplimiento a las disposiciones que se les ordene. Este artículo está basado en la ley 2.797, del 2 de septiembre de 1891, la que dispone que las aguas cloacales de las poblaciones, y residuos nocivos de los establecimientos industriales no podrán ser arrojados sin antes ser sometidos a un procedimiento eficaz de depuración.

En el capítulo correspondiente al régimen de explotación, en el artículo 37, se establece que estarán eximidos del pago de la cuota de desagües pluviales, como asimismo del pago de los servicios de agua y desagües cloacales los terrenos baldíos de propiedad de la Nación, de las provincias y de las municipalidades. Esta exención se funda en razones de orden administrativo, que han determinado que el Estado o las provincias no abonen los servicios que no se prestan, por tratarse de terrenos sin edificar, o de edificios sin instalaciones.

Los artículos 39, 40 y 41, se relacionan con la falta de pago de las deudas y certificados de

los escribanos. Si bien es cierto que por el artículo 11 de la ley 1.917, 21 de la ley 10.998 y 99 de la ley 11.744, los escribanos retienen el pago, ello se traduce luego en graves problemas cuando se alega error, prescripción, etcétera, por cuyo motivo, se ha modificado el sistema actual, ajustándolo a la realidad, señalando un breve plazo dentro del cual el oficial público deberá cumplir indefectiblemente la operación.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 44 del proyecto de ley, sólo son admisibles como excepción las que taxativamente se enumeran. Entre ellas, la falta de personalidad, concepto que se refiere tanto al demandante como al demandado, por defecto de capacidad para estar en juicio. Cabe tenerse esto en cuenta porque la Corte Suprema ha declarado su admisibilidad en el procedimiento federal, por aplicación supletoria del Código de Procedimiento de la Capital. Dicha excepción, que atañe directamente a la capacidad procesal de las partes, no debe confundirse, no obstante que en la práctica se las ha identificado algunas veces con la calidad de obrar, falta de calidad para actuar en juicio, que se articula como defensa de fondo, y que debe resolverse en la sentencia desde que afecta a uno de los requisitos de la acción que promueve.

En realidad, al establecer que el demandado deberá justificar con documentos que posee por cuenta ajena, ha querido referirse a la falta de acción que procedería por ejemplo, en el caso que el demandado no fuera propietario del inmueble, y no a la excepción dilatoria que se vincula a la incapacidad para estar en juicio.

Teniendo en cuenta, señor presidente, que los servicios que presta esta repartición no son lucrativos, en el artículo 45, se contempla que las instalaciones inmuebles de propiedad o en posesión de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, estén exentas de todo impuesto, tasa, contribución de servicios y de mejoras que se hayan sancionado o sancionen, ya sea por la Nación, las provincias o las municipalidades.

La disposición del artículo 46, que se viene aplicando desde la ley nacional número 1.917 del 25 de noviembre de 1886, sobre obras domiciliarias en la Capital, no ha originado hasta hoy perjuicio alguno a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación y, por el contrario, ha permitido resolver el problema creado a numerosos propietarios de escasos recursos por la obligación impuesta de construir las obras sanitarias.

De acuerdo al reglamento vigente, el propietario puede escoger entre los dos procedimientos siguientes: primero, construye por su cuenta con un constructor de su elección, al cual Obras Sanitarias le efectúa un control prolijo y le paga los certificados de obras hasta el monto del

préstamo; segundo, encarga la construcción a Obras Sanitarias de la Nación, la que reúne varias obras y las adjudica por licitación pública a una empresa constructora.

Para esas licitaciones se ha utilizado hasta ahora el sistema de precios unitarios fijos; pero el Consejo de Administración está facultado para emplear, cuando lo considere conveniente, el de «coste y costas», que autoriza el artículo 59 de la nueva ley de obras públicas 13.064.

Por el artículo 51, señor presidente, se examina el caso de las localidades de escasa población y que por su falta de capacidad contributiva resulte inconveniente la instalación del servicio domiciliario de provisión de agua potable, la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación establecerá un servicio provisional a base de surtidores públicos en número suficiente para la provisión gratuita de agua a los habitantes de la población. En la ley 12.140 del 21 de diciembre de 1934 se contemplaba este aspecto en forma restringida, por cuanto la inversión en cada obra y sus accesorios no debía exceder de la cantidad de 35.000 pesos anuales; pero con el nuevo artículo se suprime el límite de inversión, por considerarlo contrario al fin social que persiguen esta clase de obras.

En el capítulo 89, señor presidente, o sea el de las cláusulas especiales, el artículo 56 se refiere a la exención de todo derecho de aduana, básico o adicional, por la importación de maquinarias, medios de transportes y cualquier otro material al que se destine la construcción, por administración o por contrato. Por disposición de la ley de aduanas, actualmente los materiales destinados a la construcción de obras públicas de salubridad y agua corriente están exentas del derecho básico de aduana; pero esta franquicia no rige para el derecho adicional ni para los materiales afectados a las obras. Como se busca no encarecer las mismas, la exención debe ser extendida al derecho adicional.

Teniendo en cuenta que Obras Sanitarias de la Nación ha construido numerosas usinas, destinadas exclusivamente a sus propias instalaciones, por el artículo 62 se establece que continuarán en poder de las mismas, pudiendo construir otras nuevas, con iguales fines, cuando en las localidades donde se realicen obras de saneamiento, la Dirección de Agua y Energía Eléctrica haya expresado la determinación de no instalarlas porque ellas responden a una necesidad imprescindible de sus servicios.

La Comisión de Obras Públicas, señor presidente, juntamente con funcionarios técnicos, en representación de Obras Sanitarias de la Nación, desarrolló una tarea minuciosa, con el propósito del total esclarecimiento de algunos artículos y las modificaciones y agregados en otros. Es decir que el presente despacho ha sido elaborado con toda prolijidad, donde las

dudas o conceptos interpretativos han sido considerados con toda amplitud.

En la consideración en particular, señor presidente, se formularán algunas modificaciones para ajustar su texto al artículo 40 y 68 inciso 13 de la Constitución Nacional en vigor —debido a que el despacho fué formulado en el período anterior— y asimismo coordinarlo con las disposiciones de la ley 12.922 de creación de la Dirección Nacional Inmobiliaria.

En el mensaje del Poder Ejecutivo que acompaña al proyecto se destaca la necesidad urgente de encarar la sanción de la nueva ley, regulándola de manera orgánica y permanente si se tiene presente la índole de los servicios que aquélla está llamada a prestar.

Constituye, señor presidente, un ordenamiento que permite desenvolver una acción de provecho, con el fin de mejorar las condiciones de vida de sectores importantes de nuestro pueblo —preocupación primordial del actual gobierno— mediante el sanamiento de los muchos núcleos dispersos en el dilatado suelo del país, que soportan una existencia precaria por la escasez y aun la falta de elementos consubstanciales con la vida humana.

El proyecto tiende a coordinar disposiciones dispersas, actualizar leyes anticuadas, eliminar confusiones derivadas de la actual legislación común para obras sanitarias y riego, y regularizar el ordenamiento legal del organismo.

He procurado, señor presidente, expresar en la forma más objetiva posible las razones que abonan la aprobación por la Honorable Cámara, del proyecto de ley orgánica que estamos tra-

tando, por la trascendencia e importancia que tiene para el desarrollo de Obras Sanitarias de la Nación, poderoso engranaje de la máquina del Estado que debe estar provisto del instrumento legal que le facilite el más amplio desenvolvimiento, para poder proveer así a todos los habitantes del vasto territorio de nuestro país, de la imprescindible agua potable y de los desagües y saneamientos necesarios. Con ello habremos obtenido, señor presidente, sin lugar a dudas, lo más fundamental para nuestras vidas: preservar nuestra salud, que al decir de un gran higienista «la vida no tiene precio».

Creo haber dejado suficientemente fundamentado, con esta ligera reseña, el proyecto de ley orgánica que consideramos y para el cual solicito el voto favorable de mis honorables colegas. (*Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Lareo. — Pido la palabra para formular una moción de orden.

Sr. Presidente (Cámpora). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Lareo. — Hago moción de que se levante la sesión.

Sr. Presidente (Cámpora). — Queda momentáneamente suspendida la conferencia.

Se va a votar la moción de orden formulada por el señor diputado por Buenos Aires.

—Resulta afirmativa de 67 votos; votan 83 señores diputados.

Sr. Presidente (Cámpora). — Queda levantada la sesión.

—Es la hora 20 y 35.